



Asamblea General

Distr. general
31 de enero de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

43^{er} período de sesiones

24 de febrero a 20 de marzo de 2020

Tema 4 de la agenda

**Situaciones de derechos humanos que requieren
la atención del Consejo**

Informe de la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur* **

Resumen

La Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur hace notar con gran preocupación la falta sostenida de voluntad política de los signatarios a efectos de aplicar de buena fe las principales disposiciones del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, lo cual permitiría formar el Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado. Las élites políticas siguieron pasando por alto el intenso sufrimiento de millones de civiles por quienes, aparentemente, luchaban. En su calidad de facilitadores y garantes del Acuerdo, ni la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo ni la Unión Africana han logrado ejercer una influencia decisiva en las partes. Aunque gracias a gestiones regionales se consiguió prorrogar el período previo a la transición, los Estados a menudo persiguieron objetivos divergentes en relación con Sudán del Sur. Tras haber incumplido dos plazos, en mayo y noviembre de 2019, y a medida que se agota un tercero, persisten cuestiones no resueltas: la capacitación y el despliegue de las fuerzas unificadas necesarias, la determinación del número de estados y sus fronteras, la reestructuración del Consejo de los Estados y la promulgación del Proyecto de Ley por la que se Modifica la Constitución.

Además, fuerzas gubernamentales siguieron reclutando por la fuerza a hombres y niños en el marco de amplias campañas en los estados de Warrap, Bahr el-Ghazal Occidental y Unidad, mientras que fuerzas de la oposición reclutaron a hombres y niños en los estados de Unidad y Ecuatoria Central. En zonas de tensión como Yei y Lobonok (Ecuatoria Central) y Maiwut (Alto Nilo) prosiguieron también hostilidades entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur, milicias locales y el Frente de Salvación Nacional (que no es signatario en el Acuerdo Revitalizado). Los incidentes de conflicto armado confirmaron la persistencia de la amenaza a la paz y la seguridad y la urgente necesidad de ocuparse integralmente de las cuestiones relativas a la rendición de cuentas, la impunidad arraigada y el suministro de armas a milicias locales y grupos de resistencia.

* Se acordó publicar el presente informe tras la fecha de publicación regular debido a circunstancias que escapan al control de quien lo presenta.

** Los anexos del informe se distribuyen únicamente en el idioma en que fueron presentados.



Al margen de la fragilidad de la paz a escala nacional, se intensificaron las tensiones localizadas y, a menudo, por motivos étnicos, a raíz de lo cual el número de bajas civiles aumentó casi un 200 % durante 2018. Entre fines de febrero y mayo de 2019 la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur registró unas 531 muertes y 317 lesiones en 152 incidentes de violencia localizada. Suscitaban gran preocupación los ataques brutales, a menudo por motivos de hurto de ganado, en los que participaban miembros del aparato estatal o del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (leal a Riek Machar) (ELPS-O/RM) y que eran causa de desplazamiento a un ritmo alarmante, en particular en los estados de Bahr el-Ghazal Occidental, Unidad y Yonglei.

La violencia sexual y de género, incluida la violencia sexual relacionada con conflictos, siguió siendo un fenómeno extendido y frecuente que se caracterizó por una pauta reconocible de terror y subyugación utilizados como táctica de guerra. El entorno siguió siendo inseguro y mortífero para las mujeres y niñas sursudanesas en la medida en que la integridad corporal no estaba garantizada. La negación y la estigmatización, agravadas por la falta de rendición de cuentas en relación con las vulneraciones de carácter sexual y de género, siguieron planteando un grave problema.

Entretanto, más del 55 % de los civiles de todo el país, principalmente mujeres y niños, padecían inseguridad alimentaria aguda como consecuencia de impedimentos intencionales de la asistencia humanitaria por distintas partes, factores vinculados con el clima y el desplazamiento a gran escala provocado por el conflicto.

Se desviaron millones de dólares de la Administración Tributaria Nacional, con lo cual quedaron agotados recursos que podían haberse destinado a proteger, hacer efectivos y promover los derechos económicos, sociales y culturales de millones de civiles vulnerables. Esos desvíos de fondos públicos pueden constituir delitos económicos.

La inseguridad alimentaria aguda, sumada a la falta de acceso a servicios básicos, entre ellos el agua y la educación, marginó por completo a amplios segmentos de la población, cuya preocupación por la supervivencia cotidiana no les permitió tomar parte efectiva en la vida pública.

La denegación sistemática de los derechos y libertades fundamentales, en particular amenazas manifiestas dirigidas por fuerzas gubernamentales contra periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos, siguieron mermando considerablemente la participación en la esfera pública, lo cual supuso infracciones de las libertades de expresión, opinión y reunión. El Servicio Nacional de Seguridad siguió desempeñando un papel central en ese tipo de censura mediante la vigilancia, la supresión y detenciones arbitrarias.

Más de 1,4 millones de civiles siguieron siendo desplazados internos que se consumían en campamentos no aptos para satisfacer sus necesidades básicas y subsistían con un menor volumen de asistencia humanitaria. Además, el conflicto ha dejado cerca de 2,2 millones de refugiados y solicitantes de asilo. A lo largo de más de seis años, el Estado apenas ha actuado para mitigar el sufrimiento de los desplazados. Sin embargo, la Comisión reconoce que el cese de las hostilidades más virulentas ha desembocado en el retorno voluntario a su hogar de decenas de miles de desplazados internos y refugiados.

La corrupción, los desfalcos, las demoras en la formación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado y la falta de servicios destinados a poblaciones vulnerables de todo el país coincidieron con el refuerzo por parte del Gobierno del Presidente Salva Kiir de sus fuerzas militares y con la consolidación del control político y militar. También se mantuvo un control estatal frágil mediante la instrumentalización de conflictos localizados y la supresión de derechos y libertades fundamentales, a partir de lo cual se faccionalizó a las comunidades étnicas consideradas disidentes y quedó de manifiesto la imperiosa necesidad de que el Estado promoviera una identidad nacional común.

Hoy en día en Sudán del Sur se hace pasar hambre deliberadamente a civiles, que también se ven sometidos sistemáticamente a vigilancia e imposiciones de silencio, son objeto de detenciones y reclusiones arbitrarias y ven denegado un verdadero acceso a la justicia. La reparación por estas vulneraciones y delitos conexos es condición previa

indispensable para la paz y la seguridad sostenidas, pero seguirá resultando esquiva a no ser que todas las partes en conflicto, con apoyo de la comunidad internacional, den prioridad a las necesidades de los civiles, cumplan sus obligaciones internacionales y apliquen sin demora el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, en particular por lo que se refiere a los mecanismos de justicia de transición y al Tribunal Híbrido para Sudán del Sur.

Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	5
II. Metodología	6
III. Evolución de la situación política y de la seguridad	6
A. Aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur	6
B. Sanciones	8
C. Conflicto en curso y grupos rebeldes de resistencia	9
IV. Contexto en materia de derechos humanos	9
V. Derechos económicos, sociales y culturales	11
VI. Reclutamiento y utilización de niños en conflictos armados	14
VII. Conflictos localizados	17
VIII. Táctica de hacer padecer hambre a la población	19
IX. Violencia sexual y de género	19
X. Denegación constante de derechos y libertades fundamentales	20
XI. Conclusiones	20
XII. Recomendaciones	21
Anexos	
I. Maps	25
II. Additional findings	29
III. Applicable law	49
IV. Armed State actors (command structures)	56
V. Armed non-State actors (estimated deployment until 31 December 2019)	61

I. Introducción

1. En su resolución 31/20, el Consejo de Derechos Humanos estableció la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur por un período de un año. La Comisión presentó su primer informe al Consejo en su 34º período de sesiones (A/HRC/34/63).
2. En su resolución 34/25, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Comisión por otro año y solicitó a la Comisión que siguiera vigilando la situación de los derechos humanos en Sudán del Sur e informando al respecto, que formulara recomendaciones para evitar un deterioro aún mayor de la situación y que informara y proporcionara orientación sobre la justicia de transición, incluida la reconciliación.
3. El Consejo de Derechos Humanos también solicitó a la Comisión que determinara y comunicara los hechos y circunstancias de las presuntas violaciones y vulneraciones graves de los derechos humanos y los presuntos delitos conexos, incluidas la violencia sexual y de género y la violencia étnica, que reuniera y preservara las pruebas correspondientes y que aclarara las responsabilidades, con miras a poner fin a la impunidad y asegurar la rendición de cuentas. Además, el Consejo solicitó a la Comisión que pusiera esa información a disposición de todos los mecanismos de justicia de transición, incluidos los que habrían de crearse en aplicación del capítulo V del Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur, como el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, que se establecería en cooperación con la Unión Africana¹.
4. En su resolución 37/31, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Comisión un año más, algo que volvió a hacer en su resolución 40/19. Los actuales miembros de la Comisión, nombrados por la Presidencia del Consejo, son Yasmin Sooka (Presidenta), Andrew Clapham y Barney Afako.
5. La Comisión contó con el apoyo de una secretaría con sede en Yuba. Llevó a cabo misiones en varias ubicaciones de Sudán del Sur, entre ellas Akobo (Yonglei), Akouyo (Bahr el-Ghazal Occidental), Bentiu (estado de Unidad), Bor (Yonglei), Gedi (Bahr el-Ghazal Occidental), Luri (Ecuadoria Central), Kuajena (Bahr el-Ghazal Occidental), Kuajok (Warrap), Mankien (estado de Unidad), Pibor (Yonglei), Rocrocdong (Bahr el-Ghazal Occidental), Wau (Bahr el-Ghazal Occidental) y Yei (Ecuadoria Central). También llevó a cabo misiones en Addis Abeba, Kampala y Entebbe (Uganda), Nairobi, El Cairo y Europa (lugar no revelado). La Comisión se reunió con una amplia variedad de víctimas, testigos, funcionarios del Gobierno, miembros de la sociedad civil y otros interesados destacados. Además, del 16 al 18 de diciembre de 2019 organizó un taller sobre justicia de transición en Addis Abeba, y en febrero de 2020 celebrará otro en Kampala sobre violencia sexual y de género.
6. Durante el actual mandato, la Comisión tomó más de 216 declaraciones detalladas de testigos y reunió más de 3.340 documentos, incluidos registros confidenciales, sobre los incidentes ocurridos en Sudán del Sur desde diciembre de 2013. Todas las pruebas reunidas se preservan en la base de datos y los archivos confidenciales de la Comisión.
7. La Comisión hace extensivo su agradecimiento al Gobierno de Sudán del Sur por facilitar sus misiones y agradece la cooperación dispensada por los Gobiernos de Etiopía, Uganda y Kenya durante sus misiones a esos Estados. También agradece la asistencia y las contribuciones recibidas de la Unión Africana y la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), así como de organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos.

¹ En cumplimiento de su mandato, la Comisión reúne y preserva pruebas que almacena en una base de datos y cataloga asignándoles números de registro de la prueba (NRP) únicos. En el curso del presente informe se hace referencia a estos números para que los Estados hagan uso de ellos cuando soliciten consultar las pruebas.

II. Metodología

8. La Comisión presenta este informe al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con la resolución 40/19 del Consejo. En el informe, la Comisión centra principalmente su atención en el establecimiento de los hechos y circunstancias de los incidentes ocurridos entre la firma del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, en septiembre de 2018, y diciembre de 2019.

9. En vista de la importancia atribuida en su mandato a la rendición de cuentas, la Comisión también centró su atención en el establecimiento de responsabilidades por las violaciones y la identificación de los responsables de esas violaciones y delitos. Para aclarar las responsabilidades por delitos internacionales, en particular la responsabilidad de los mandos o superiores conforme al derecho internacional, la Comisión procuró determinar las estructuras de mando, las pautas de conducta y los indicadores de control y disciplina.

10. La determinación de los hechos en los distintos incidentes y los patrones de conducta constituyeron la base para la cualificación jurídica de las violaciones de los derechos humanos, de los delitos previstos en la legislación de Sudán del Sur y, en los casos procedentes, de delitos internacionales tales como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

11. La Comisión adoptó como valoración probatoria la existencia de “motivos razonables para creer”. Su labor se basó en la necesidad de reunir y preservar pruebas de un modo que fuera útil para los trabajos de los futuros mecanismos de rendición de cuentas, incluida la exigencia de responsabilidades penales.

12. En los casos en que la Comisión encontró información que vinculaba a presuntos autores con determinadas violaciones o con cuadros de violaciones en suficiente medida para justificar ulteriores investigaciones o enjuiciamientos, conservó esa información de manera estrictamente confidencial. En algunos casos, no encontró información suficiente para identificar a las personas responsables de las violaciones; en tales casos, la responsabilidad se ha asignado a las fuerzas armadas o los grupos armados a los que pertenecían estas personas.

13. La Comisión empleó las mejores prácticas de determinación de hechos para garantizar la seguridad, la confidencialidad y el bienestar de los testigos. En consecuencia, solo se incluyó información para la que se había obtenido el consentimiento informado de las fuentes y cuya divulgación no pudiera dar lugar a la identificación de las fuentes o causar daños. La Comisión expresa su agradecimiento a todas las víctimas y los testigos que le comunicaron sus experiencias; en todo momento siguió guiándose por el principio de “no hacer daño”.

III. Evolución de la situación política y de la seguridad

A. Aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur

14. En cumplimiento del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur de septiembre de 2018, el Presidente Salva Kiir y el Vicepresidente designado Riek Machar convinieron en formar para mayo de 2019 un Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado; sin embargo, al no haberse aplicado disposiciones esenciales, en particular arreglos en materia de seguridad y respecto de las fronteras de los estados (véanse los párrs. 17 a 19 del presente documento), el 3 de mayo se introdujo una nueva prórroga de seis meses facilitada por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Atendiendo a una invitación del Presidente Kiir, los dos dirigentes se reunieron en Yuba los días 9 y 11 de septiembre de 2019 para tratar de las cuestiones pendientes. Sin embargo, fueron incapaces de llegar a una solución de compromiso.

15. El Presidente de Uganda, Yoweri Museveni, convocó el 7 de noviembre una cumbre tripartita a la que asistieron el Presidente del Consejo Soberano del Sudán, el General Abdel Fattah al-Burhan, y el enviado de Kenya, Kalonzo Musyoka, así como el Presidente Kiir y el Vicepresidente designado Machar, para evitar una crisis que ponía en peligro el alto el fuego e impulsar la formación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado. A raíz de la cumbre, el período previo a la transición se prorrogó 100 días más, del 12 de noviembre de 2019 al 22 de febrero de 2020, lo cual permitiría disponer de más tiempo para, entre otras cosas, ocuparse de las tareas esenciales pendientes relativas a los arreglos en materia de seguridad, incluida la formación del Gobierno de Transición².

16. Una de las claves para salir del punto muerto consiste en convenir en el número y las fronteras de los estados, algo que, en última instancia, determinará la distribución del poder en todo el país. La resolución de esta cuestión será fundamental para determinar los arreglos de seguridad para la capital, Yuba, establecer un ejército unificado, reestructurar el Consejo de los Estados y promulgar el Proyecto de Ley por la que se Modifica la Constitución, además de otras leyes en materia de seguridad revisadas por el Comité Nacional de Reforma Constitucional³.

1. Acantonamiento

17. El acantonamiento, la inscripción, la verificación de antecedentes, la selección, el adiestramiento y el redespliegue de combatientes a fin de formar las fuerzas unificadas necesarias, ejército unificado integrado por 83.000 soldados (véase el anexo I, mapa 1), constituyen una de las piedras angulares del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. Durante el período sobre el que se informa apenas se registraron progresos limitados⁴. A principios de noviembre, 24 de las 25 zonas de acantonamiento designadas para fuerzas de la oposición estaban funcionando y ofrecían servicios de inscripción, y los 10 barracones correspondientes a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (FDPSS) también se dedicaban a la inscripción⁵. Además, unos 69.000 contingentes de los 83.000 que integraban las fuerzas unificadas necesarias se habían inscrito en zonas de acantonamiento y barracones designados, aunque seguían a la espera de verificación de antecedentes, selección, adiestramiento y redespliegue. Un factor esencial del éxito del proceso de verificación de antecedentes, selección y adiestramiento es la financiación suficiente. Sin embargo, en vista de que el Gobierno no ha cumplido su promesa de destinar 100 millones de dólares al proceso y a otros mecanismos de seguridad, la mayor parte de los emplazamientos de las guarniciones carecían de acceso a agua, alimentos o servicios médicos adecuados y presentaban unas condiciones de vida deplorables. También se han planteado preocupaciones con respecto a la proximidad de

² Globalmente, durante el período previo a la transición debían haberse llevado a cabo 63 actividades antes del 12 de noviembre de 2019. A principios de noviembre se había puesto fin a solo 31, otras 22 seguían llevándose a cabo y 10 no se habían puesto en marcha. Véase el informe sobre el estado de aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019 (disponible en <https://jmecsouthsudan.org/index.php/reports/rjmec-quarterly-reports/155-rjmec-quarterly-report-to-igad-on-the-status-of-implementation-of-the-r-arcss-from-1st-july-to-30th-september-2019/file>), pág. ii.

³ *Ibid.*

⁴ Desglose de las fuerzas unificadas necesarias: contingentes militares (35 %): 29.050; Servicio Nacional de Seguridad (10 %): 8.300; Policía Nacional (8 %): 6.640; Policía Estatal (26 %): 21.580; Servicio de Fauna y Flora Silvestres (7 %): 5.810; Servicio Penitenciario (10 %): 8.300; y Servicio de Bomberos (4 %): 3.320. Total: 83.000. En las cifras no se incluye la Dependencia de Protección de Personalidades, cuya plantilla estimada asciende a 3.000 personas.

⁵ Véase el informe sobre el estado de aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019, pág. ii; véase también el informe sobre el estado de aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 (disponible en www.jmecsouthsudan.com/index.php/reports/rjmec-quarterly-reports/133-rjmec-quarterly-report-to-igad-on-the-status-of-implementation-of-the-r-arcss-from-1st-january-2019-to-31st-march-2019/file), pág. iv.

estos emplazamientos a la población civil, en particular a mujeres y niñas (véase el anexo II, párr. 49).

2. Fronteras administrativas

18. En octubre de 2015 el Presidente Kiir declaró unilateralmente la creación en Sudán del Sur de 28 estados en sustitución de los 10 originales⁶ y anunció la creación de otros cuatro estados en enero de 2017, con lo cual el número total ascendió a 32⁷. La demarcación por el Presidente de estos 32 estados exacerbó las tensiones motivadas por el acceso a los recursos naturales, pues garantizaba efectivamente al grupo étnico dinka, al que pertenecía el Presidente, el control de valiosos recursos, en particular de petróleo. Muchos grupos, en particular los fertit y los luo (Bahr el-Ghazal Occidental), los shilluk (Alto Nilo) y los habitantes de Ecuatoria, entendieron que se trataba de una manipulación de los límites de los distritos electorales para promover los intereses de los dinka.

19. La Comisión Independiente de Límites puso en marcha su labor el 28 de febrero de 2019 con el apoyo del Comité Especial de Alto Nivel de la Unión Africana para Sudán del Sur, integrado por Argelia, el Chad, Nigeria, Rwanda y Sudáfrica con miembros designados por la Secretaría Ejecutiva de la IGAD⁸. La Comisión Independiente de Límites examinó el número de estados y sus fronteras, así como la composición y reestructuración del Consejo de los Estados⁹, pero no pudo llegar a un consenso ni reunir el apoyo de, por lo menos, siete miembros¹⁰.

20. Aunque el Comité Nacional de Reforma Constitucional presentó en abril de 2017 al Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales un nuevo proyecto de Constitución, el examen de este sigue pendiente. Además, a fines de enero de 2018 el Comité había ultimado cinco proyectos de ley de modificación de la legislación en materia de seguridad, entre ellos la Ley sobre el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (2009), la Ley de Seguridad Nacional (2014), la Ley de Servicios de Policía (2009), la Ley de Servicios Penitenciarios (2011) y la Ley del Servicio de Fauna y Flora Silvestres (2011), aunque no se había aprobado ninguno de ellos en el momento en que se redactaba el presente informe¹¹. Durante el período sobre el que se informa también inició su examen de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas y Rendición de Cuentas (2011), la Ley de la Cámara Nacional de Auditoría (2011) y la Ley de la Comisión de Sudán del Sur de Lucha contra la Corrupción (2009)¹², Leyes referentes a varias cuestiones vinculadas con los derechos humanos, el estado de derecho y la gobernanza democrática, mientras que las modificaciones van dirigidas a garantizar una contratación y una rendición de cuentas justas e inclusivas.

21. La Comisión observa con preocupación que los signatarios se ocupan de las estipulaciones enumeradas en el Acuerdo Revitalizado de manera estrictamente formalista, como si estuvieran rellenando casillas. En vista de esta falta de voluntad política, a raíz de la cual los progresos fueron mínimos durante el período sobre el que se informa, los objetivos enunciados en el Acuerdo Revitalizado solo podrán lograrse mediante una intervención emprendida de buena fe.

B. Sanciones

22. Se siguieron utilizando sanciones, en particular por parte de los Estados Unidos, como medio de hacer efectivo el cumplimiento de las normas de derechos humanos y

⁶ Orden de Establecimiento núm. 36/2015 de 2 de octubre de 2015.

⁷ Orden de la República núm. 02/2017 de 14 de enero de 2017.

⁸ De conformidad con el artículo 1.15.1 del Acuerdo Revitalizado.

⁹ *Ibid.*, art. 1.15.7.

¹⁰ *Ibid.*, art. 1.15.9.

¹¹ Durante el período sobre el que se informa el Comité Nacional de Reforma Constitucional también redactó la Ley del Cuerpo Nacional de Bomberos (2019).

¹² Véase el informe sobre el estado de aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019, pág. 6.

garantizar la aplicación del Acuerdo Revitalizado. En septiembre y diciembre de 2017 los Estados Unidos anunciaron la imposición de sanciones selectivas a cuatro funcionarios de Sudán del Sur por amenazas planteadas a la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán del Sur¹³. Durante el período sobre el que se informa los Estados Unidos sancionaron a otros ocho ciudadanos de Sudán del Sur, entre ellos al Vicepresidente primero, Taban Deng Gai, por su presunta participación en violaciones y transgresiones de los derechos humanos o por “obstaculizar el proceso de reconciliación o las conversaciones de paz”¹⁴.

C. Conflicto en curso y grupos rebeldes de resistencia

23. La Comisión sigue preocupada por que el aparato estatal esté ausente en grandes extensiones territoriales de Sudán del Sur, lo cual no solo ha exacerbado el sufrimiento de los civiles a raíz de la falta de prestación efectiva de servicios, sino que ha permitido asumir el control a grupos de resistencia y a la oposición. A causa de la ausencia del Estado, esta dinámica desembocó en una serie de hostilidades armadas durante el período sobre el que se informa.

24. También prosiguieron en zonas de tensión, entre ellas Yei y Lobonok (Ecuatoria Central) y Maiwut, hostilidades entre las FDPSS, milicias locales y el Frente de Salvación Nacional (que forma parte de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur). Desde noviembre de 2018, el Frente de Salvación Nacional y el Frente Unido de Sudán del Sur, ninguno de los cuales eran signatarios del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, siguieron enfrentándose en Ecuatoria a fuerzas gubernamentales. Mientras que partes del estado de Ecuatoria Central siguieron controladas por elementos del Frente de Salvación Nacional y el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (leal a Riek Machar) (ELPS-O/RM), otras siguieron sujetas al control de fuerzas gubernamentales. La fragmentación de los agentes armados en la región del Alto Nilo y Ecuatoria Central también contribuyó a la violencia y las violaciones de los derechos humanos en curso, en particular a incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto.

IV. Contexto en materia de derechos humanos

25. Los años de conflicto armado previos a la independencia de Sudán del Sur han dejado como legado un país dividido en el que élites políticas depredadoras y ajenas a toda rendición de cuentas han librado enfrentamientos violentos por el poder y los recursos en detrimento de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La penosa situación en que ello deja a los derechos humanos en todo Sudán del Sur se caracteriza por la táctica deliberada de hacer padecer hambre a civiles, las crisis de refugiados y de desplazados internos más agudas de África y la violencia sexual y de género. Ha pasado a ser norma un mayor predominio de las consideraciones de seguridad en instituciones estatales que siembran el miedo y el terror en un entorno en el que se priva a los ciudadanos de sus derechos humanos fundamentales y en el que la tortura, la intimidación, las detenciones ilícitas y arbitrarias y las desapariciones forzadas han pasado a estar a la orden del día.

26. Durante el período sobre el que se informa, fuerzas gubernamentales fueron responsables de la mayor parte de los ataques dirigidos contra civiles, en particular de incidentes de pillaje, violencia sexual relacionada con el conflicto, junto con otras formas de violencia sexual y de género, detención y reclusión arbitrarias, denegación de las libertades de expresión, opinión y reunión, reclutamiento y utilización de niños en fuerzas

¹³ Véase el documento de sesión en el que figuran las principales constataciones de la Comisión (A/HRC/40/CRP.1). Puede consultarse en la página web de la Comisión, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoHSouthSudan/Pages/Index.aspx.

¹⁴ Véanse los comunicados de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos “Treasury Sanctions Individuals for Roles in Atrocities and Other Abuses”, de 10 de diciembre de 2019, “Treasury Sanctions Two Senior South Sudanese Officials for Obstructing Reconciliation Efforts”, de 16 de diciembre de 2019, y “Treasury Sanctions South Sudanese First Vice President for Role in Serious Human Rights Abuse”, de 8 de enero de 2020.

armadas y restricciones arbitrarias a la asistencia humanitaria en contravención del derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Grupos armados también han cometido graves contravenciones del derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular mediante el reclutamiento y la utilización de niños.

27. Sudán del Sur lleva sumido desde la independencia en conflictos étnicos, y en el país apenas se invierte en la construcción del Estado o en el desarrollo de infraestructuras. La corrupción arraigada y sistémica es el principal obstáculo a la paz y la estabilidad. La escasa capacidad institucional para prestar los servicios más básicos que cabe exigir a un Gobierno operativo y responsable socava la resiliencia del Estado. El profundo arraigo de la impunidad queda de manifiesto en la falta de rendición de cuentas por los delitos graves cometidos; el hecho de que no se hayan establecido mecanismos de justicia de transición; el hecho de que el Estado dé prioridad a la financiación del aparato militar y de seguridad frente a la inversión en servicios públicos, infraestructura y medios de vida; y el rentismo, caracterizado por delitos económicos como la corrupción y los desfalcos que debilitan la funcionalidad del Estado.

28. Mientras que en el derecho interno y en los tratados internacionales a los que Sudán del Sur se ha adherido voluntariamente figuran salvaguardias esenciales para la protección de los derechos humanos y la promoción de la rendición de cuentas, el respeto y la aplicación de estas disposiciones han seguido siendo inadecuados. Al tiempo que la falta de instituciones eficaces de estado de derecho contribuyó a la desestabilización de la seguridad, la rendición de cuentas por las atrocidades y los crímenes de otro tipo siguió siendo deficiente durante el período sobre el que se informa. El sistema de Sudán del Sur de tribunales competentes siguió adoleciendo de un déficit de confianza entre los ciudadanos. La insuficiencia de la infraestructura, los recursos y la capacidad mermó aún más las posibilidades del Estado de facilitar a los civiles acceso a una verdadera justicia. En una reunión confidencial celebrada el 20 de agosto la Comisión se enteró de que los cargos judiciales vacantes y el impago de salarios paralizaban el funcionamiento de determinados tribunales, incluso en Yuba.

29. En Bor (Yonglei) y en Bentiu (Unidad) el recurso predominante a tribunales consuetudinarios que no tenían mandato para conocer de casos penales graves, carecían de salvaguardias de procedimiento y presentaban sesgos culturales muy arraigados respecto de las mujeres y las niñas también impidió un verdadero acceso a la justicia. Sin embargo, a partir de octubre de 2018 el sistema de tribunales móviles respaldado por las Naciones Unidas mejoró el acceso a la justicia en por lo menos diez localidades¹⁵.

30. Otra iniciativa dirigida a subsanar deficiencias críticas en el poder judicial fue la formación en Yuba de una sala especializada encargada de casos de violencia sexual y de género que debía haber estado funcionando al 31 de octubre de 2019 (anexo II, párr. 64). En el momento en que se redactaba el presente informe solo se habían determinado los locales en que estaría ubicada la sala. Aunque el establecimiento de una sala especializada en la cuestión de la violencia sexual y de género es un avance positivo, la Comisión observa que la sala prevista funcionará a escala nacional y no estatal. Además, aunque tribunales móviles se han ocupado de casos de violencia sexual y de género, no parece que estén vinculados con la sala especializada, con lo cual miles de víctimas de todo el país quedan privadas de acceso a la justicia, entre ellas víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto, asunto que escapa al limitado mandato de la sala especializada. Pese a estos compromisos, se ha enjuiciado a muy pocos responsables de actos de violencia sexual y de género o de violencia sexual relacionada con el conflicto.

31. En diciembre de 2019 el Servicio Nacional de Seguridad anunció también la creación de un tribunal especial integrado por cinco jueces que se encargaría de juzgar a miembros suyos que fueran responsables de actos delictivos, infracciones de la Ley de Seguridad Nacional y cualquier otra ley o reglamento. Según el Director de Asuntos

¹⁵ Véase Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Mobile Courts in South Sudan”, 25 de marzo de 2019, disponible en <https://reliefweb.int/report/south-sudan/mobile-courts-south-sudan>; y “Mobile court concludes proceedings in Malakal”, Mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, 23 de septiembre de 2019, disponible en <https://peacekeeping.un.org/en/mobile-court-concludes-proceedings-malakal>.

Jurídicos del Servicio Nacional de Seguridad, el tribunal también estará “facultado para juzgar y sancionar a funcionarios del cuerpo de suboficiales de seguridad nacional, a título individual o en calidad de miembros del Servicio Nacional de Seguridad, cuando se les imputen delitos que comprendan atentados contra los derechos humanos”¹⁶.

32. Pese a ciertos avances, sigue preocupando hondamente a la Comisión la falta de progresos en la creación de mecanismos de justicia de transición de conformidad con el capítulo V del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, en particular respecto de la violencia sexual y de género. Durante el período sobre el que se informa se avanzó poco en la creación del Tribunal Híbrido. En diciembre de 2019 la Oficina del Asesor Jurídico de la Unión Africana, en consulta con el Juez Theodor Meron y el Profesor Bongani Majola, observó que se había terminado de redactar el proyecto de estatuto del Tribunal Híbrido y que el comité de redacción prepararía el proyecto de reglamento del Tribunal. Sin embargo, no se avanzó en la creación de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Regeneración o de la Autoridad de Indemnizaciones y Reparaciones, que deberían complementarse con mecanismos consuetudinarios y otros mecanismos centrados en la comunidad (anexo II, párrs. 87 a 94).

V. Derechos económicos, sociales y culturales

33. Los niveles extremos de pobreza y la falta de acceso a servicios esenciales se vieron agravados por delitos económicos cometidos por miembros del aparato estatal¹⁷. La corrupción ha reportado abundante riqueza a varios funcionarios en detrimento de millones de civiles que se mueren de hambre, lo cual ha comportado una desigualdad socioeconómica aguda. Con el paso del tiempo, la corrupción ha resultado tan lucrativa que ha infectado a todos los sectores de la economía y todas las instituciones del Estado¹⁸. El desvío ilícito de ingresos ha privado al Gobierno de recursos decisivos para financiar el ejercicio efectivo de derechos económicos, sociales y culturales como la salud, la educación, la alimentación, la agricultura y el agua¹⁹.

34. La malversación y el desvío de fondos públicos resultan más fáciles a causa de la economía monetaria que impera en Sudán del Sur y se ven facilitados por el nepotismo ejercido en el nombramiento de los cargos gubernamentales superiores. La falta generalizada de transparencia y de supervisión civil de la contabilidad empeora el problema. Como consecuencia de los enormes defectos en el establecimiento de prioridades, Sudán del Sur destina su dinero a su élite militar y gobernante y no a la mejora de la infraestructura o de los servicios públicos.

35. Desde el Acuerdo General de Paz de 2005, la economía de Sudán del Sur ha dependido fundamentalmente de los ingresos derivados del petróleo, que representan la inmensa mayoría de las exportaciones y, en el momento actual, el 73 % de los ingresos del Estado²⁰. El efecto acumulativo de esta dependencia confirió al país un perfil geopolítico más destacado y dio lugar a un modelo rentista de Estado en virtud del cual se invirtió un volumen considerable de ingresos derivados del petróleo crudo en beneficio de clientes externos, como China, la India y Malasia. Sin embargo, los beneficios acumulados siguieron estando acaparados por las élites políticas en lugar de reinvertirse en el país y sus ciudadanos, como se establece en la legislación en la materia²¹.

¹⁶ Dimo Silva Aurelio, “South Sudan Creates Tribunal to Try Security Operatives”, VOA, 5 de diciembre de 2019.

¹⁷ Véase el documento de sesión A/HRC/40/CRP.1, que puede consultarse en la página web de la Comisión, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoHSouthSudan/Pages/Index.aspx.

¹⁸ Alex de Waal, “When Kleptocracy Becomes Insolvent: Brute Causes of the Civil War in South Sudan”, *African Affairs*, vol. 113, núm. 452 (2014), págs. 347 a 369.

¹⁹ Véase, por ejemplo, Sam Mednick, “Sprouting Weapons of War”, Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción, 17 de julio de 2019, disponible en www.occrp.org/en/investigations/sprouting-weapons-of-war.

²⁰ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), National Budget Brief, mayo de 2019, disponible en www.unicef.org/southsudan/reports/national-budget-brief.

²¹ Véase, por ejemplo, la Ley de Gestión de los Ingresos Derivados del Petróleo (2013), art. 29.

36. Las partes en el Acuerdo Revitalizado procuraron corregir esta falta de rendición de cuentas dedicando las disposiciones del capítulo IV a reformas y medidas pensadas para promover la rendición de cuentas y la transparencia en el uso y la gestión de los recursos públicos, haciendo especial hincapié en los ingresos derivados del petróleo. Las medidas previstas en el capítulo IV se basan esencialmente en la legislación nacional de Sudán del Sur, en particular en la Ley del Petróleo y la Ley de Gestión de los Ingresos Derivados del Petróleo de 2012. Otras leyes pertinentes con las que se persigue dotar de transparencia a las finanzas públicas son el capítulo 9 de la Ley de Gestión de los Ingresos Derivados del Petróleo (2013)²², el capítulo 5 de la Ley de Comités de Investigación (2006)²³ y el capítulo 11 de la Ley del Banco de Sudán del Sur (2011)²⁴.

1. Ingresos distintos de los derivados del petróleo

37. También de conformidad con el capítulo IV, la Administración Tributaria Nacional pasó a encargarse primordialmente de la recaudación y la administración de los ingresos distintos de los derivados del petróleo²⁵, recaudados antes por el Ministerio de Finanzas. En una reunión confidencial se informó a la Comisión de que durante el primer semestre de 2019 la Administración Tributaria incrementó de forma constante la recaudación de ingresos²⁶, moderó las desgravaciones fiscales excesivas, racionalizó la contratación de cargos superiores de la Administración Tributaria Nacional²⁷, amplió la base imponible y aumentó la transparencia presentando estadísticas mensuales públicas sobre los ingresos recaudados.

38. La labor de recaudación se vio frenada el 23 de agosto de 2019 cuando el Ministro de Finanzas y Planificación Económica, Salvatore Garang Mabiordit, cesó al Comisionado General y a la Junta Directiva de la Administración Tributaria Nacional por múltiples denuncias que ambas partes han negado²⁸. El 28 de octubre de 2019 el Ministro adujo que el Comisionado General había abierto ilegalmente y utilizaba una cuenta única del tesoro en Mombasa (Kenya)²⁹ para desviar fondos de la cuenta operacional de la Administración Tributaria. La Junta rechazó esta denuncia de infracción y confirmó que sabía de la apertura de la cuenta y las subsiguientes transacciones y las había autorizado³⁰.

39. La Comisión tiene motivos razonables para creer que, desde que se cesó ilícitamente al Comisionado General y a la Junta, se han desviado constantemente fondos procedentes de ingresos distintos de los derivados del petróleo a la cuenta operacional de la Administración Tributaria Nacional gestionada por el Banco de Sudán del Sur en nombre de la Administración³¹. La Ley de la Administración Tributaria Nacional establece que, del monto total recaudado, la Administración solo puede quedarse con un 2 %³² destinado a sus operaciones (el único pago al que tiene derecho por ley la Administración), mientras que el resto debe transferirse a la cuenta consolidada del Gobierno. Obran en poder de la Comisión pruebas fidedignas de que en septiembre de 2019 se transfirió a la cuenta de la

²² Capítulo 9, sobre transparencia y rendición de cuentas.

²³ Capítulo 5, epígrafe 21: Acceso público al proceso de investigación y la información al respecto.

²⁴ Capítulo 11: Cuentas, estados financieros, auditorías e informes.

²⁵ Acuerdo Revitalizado, arts. 4.10.1.4 y 5.

²⁶ Estadísticas anuales en poder de la Comisión.

²⁷ La Comisión se enteró en una reunión confidencial de que la Junta de la Administración Tributaria Nacional había mantenido el encargo de la Administración Tributaria de Tanzania de ocuparse de la contratación de puestos superiores de la Administración Tributaria Nacional. Sin embargo, desde el año pasado han quedado congeladas todas las contrataciones para que pueda procederse a la verificación de antecedentes en relación con la Administración Tributaria Nacional.

²⁸ Orden Ministerial RSS/MoF&P/MO/3/08/19 y documentos en poder de la Comisión.

²⁹ Siendo Sudán del Sur un país sin litoral, gran parte de sus importaciones llegan al puerto de Mombasa, donde son gravadas.

³⁰ Véase el comunicado de prensa de la Junta, que puede consultarse en <http://updm-rss.org/press-statement-by-the-defunct-national-revenue-authority-nra-board>.

³¹ Documentos confidenciales en poder de la Comisión.

³² Reunión confidencial celebrada el 23 de octubre de 2019.

Administración el 56 % del total de los ingresos distintos de los derivados del petróleo, mientras que solo se transfirió a la cuenta del Gobierno el 42 %³³.

40. Pruebas correspondientes a octubre y noviembre de 2019 que obran en poder de la Comisión confirman que casi el 80 % de los ingresos recaudados distintos de los derivados del petróleo se desvió a la cuenta operacional de la Administración Tributaria Nacional, mientras que solo se envió el 20 % a la cuenta que el Gobierno tiene abierta en Nairobi³⁴. En una reunión confidencial celebrada el 2 de septiembre de 2019 la Comisión recibió confirmación de que los fondos desviados a la cuenta operacional de la Administración no llegan al Gobierno conforme a lo establecido por ley. En octubre de 2019 el Comisionado General interino también afirmó que la ley no exigía la difusión pública de las estadísticas mensuales donde se detallaban las sumas recaudadas por la Administración que se habían publicado de enero a mediados de agosto de 2019 (práctica puesta en marcha por el anterior Comisionado) y, en consecuencia, suspendió la iniciativa, con lo cual se intensificó el secreto de Estado que rodeaba a la recaudación de ingresos y los gastos.

41. A mediados de julio de 2019 la Administración Tributaria Nacional presuntamente había recaudado más de 36 millones de dólares (7.000 millones de libras de Sudán del Sur) procedentes de fuentes distintas del petróleo³⁵. En una reunión confidencial celebrada el 2 de septiembre de 2019 la Comisión recibió información fidedigna en el sentido de que en septiembre y octubre habían desaparecido millones de dólares en concepto de ingresos públicos entrantes que no se habían ingresado en la cuenta ordinaria de la Administración. Los últimos diez años los Auditores Generales de Sudán del Sur no han podido cumplir eficazmente sus funciones ni presentar informes de conformidad con las normas y principios de auditoría a causa de la negativa del Gobierno a publicar y recibir informes de ese tipo, lo cual socava la capacidad del Estado de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Violaciones y presuntos delitos: conclusiones

42. Sudán del Sur se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en enero de 2015, y en enero de 2013 firmó la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción, que todavía no ha ratificado. Ambos tratados prohíben a los Estados Miembros adoptar o aplicar políticas que fomenten la corrupción o el desfalco de recursos públicos. Sudán del Sur también ha creado una comisión de lucha contra la corrupción cuya función consiste en proteger los recursos públicos e investigar los casos de corrupción y de uso indebido de recursos públicos³⁶.

43. Sobre la base de lo que antecede, la Comisión tiene motivos razonables para creer que miembros del Gobierno han tomado parte en actos que constituyen delitos económicos, en particular evasión de impuestos, blanqueo de dinero, soborno, utilización de la posición personal para influir en las decisiones relativas a la asignación de los recursos del Estado y utilización de fondos públicos para obtener un beneficio o ventaja personal, a sabiendas de que su conducta no solo los enriquecería indebidamente, sino que también privaría al Gobierno de recursos esenciales para la prestación de servicios vitales a los civiles y para la mejora de la protección social.

44. La Comisión dará a conocer sus conclusiones detalladas sobre los delitos económicos, entre ellos la falta de transparencia y de supervisión civil, el desvío de los ingresos nacionales y los flujos financieros ilícitos, en un documento de sesión (A/HRC/43/CRP.2) en el que se pondrá de relieve la manera en que los delitos económicos coartan el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales esenciales, entre ellos el acceso adecuado a alimentos, educación y atención médica, y su repercusión desproporcionada en los niños, lo cual es causa de niveles altos de mortalidad de niños menores de 1 año.

³³ Documentos confidenciales en poder de la Comisión.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ “South Sudan collects 36 mln USD tax from non-oil sources”, Xinhua, 12 de julio de 2019.

³⁶ Ley de Lucha contra la Corrupción (2009); Constitución de Transición, párr. 147.

VI. Reclutamiento y utilización de niños en conflictos armados³⁷

45. Los retrasos en el avance y la aplicación selectiva del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur tuvieron una repercusión desproporcionada en la vida de los niños durante el período sobre el que se informa. La malnutrición aguda grave, la falta de servicios esenciales y la brutalidad constante de la violencia intercomunitaria, la violencia mutuamente destructiva y la violencia sexual y de género siguieron victimizando a los niños y niñas de Sudán del Sur por diversos motivos. A fines de julio de 2019 se pensaba que unos 19.000 niños seguían reclutados en las filas de las FDPSS y en grupos armados de la oposición³⁸. Preocupa que el número estimado de niños reclutados por partes en conflicto sea el mismo desde, por lo menos, diciembre de 2017³⁹.

46. Durante el período sobre el que se informa, miembros de la División 6A del ELPS-O/RM radicados en Achot (Wau) y fuerzas gubernamentales, entre ellas el Servicio Nacional de Seguridad y la División Tigre de las FDPSS⁴⁰, las Divisiones de las FDPSS 3 (radicada en los estados de Bahr el-Ghazal Septentrional (Winejok) y Warrap (Panachier)), 4 (radicada en Rubkona (Unidad), 5 (radicada en los barracones de Girinty (Wau) en el estado de Bahr el-Ghazal Occidental) y 10⁴¹, además de las FDPSS aliadas a Taban Deng⁴², siguieron reclutando, adiestrando y utilizando niños de apenas 12 años de edad en los estados de Wau, Warrap, Unidad y Ecuatoria Central. En este último estado se encuentra la base de poder del Frente de Salvación Nacional. Pese a las disposiciones que figuran en el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, la Ley sobre el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán y la Ley de Seguridad Nacional, la Comisión recibió información fidedigna en el sentido de que las campañas de reclutamiento organizadas por fuerzas gubernamentales iban dirigidas a incorporar a 10.000 hombres y niños⁴³, mientras que según las estimaciones de algunas fuentes la cifra asciende a 17.000⁴⁴.

47. Aunque en el artículo 2.1.10.3 del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur se reafirmaba el compromiso asumido en los artículos 3, párrafo 2) f), 9, párrafo 1, y 10, párrafo a), del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades de 2017 a efectos de renunciar a la utilización de niños y su reclutamiento en las fuerzas armadas o en milicias, los avances registrados desde su firma han sido exiguos. En el marco de una planificación que había comenzado ya en septiembre de 2018 y un reclutamiento que prosiguió hasta, por lo menos, julio, el Servicio Nacional de Seguridad y las FDPSS se reforzaron, especialmente en Warrap, en particular mediante el reclutamiento forzado y la utilización de niños (el adiestramiento de las fuerzas presuntamente comenzó en Yithkuel, Tonj Meridional (Warrap), en agosto de 2019). Los niños reclutados informaron de su traslado entre la División 3 de las FDPSS en Warrap y los barracones militares Girinty de la División 5 en Wau⁴⁵, Yithkuel (Tonj Meridional) y las instalaciones de adiestramiento del Servicio Nacional de Seguridad en Luri (en las proximidades de

³⁷ No se divulga cierta información de conformidad con el principio de “no hacer daño”.

³⁸ Véase UNICEF, “32 children released from opposition groups in South Sudan”, 24 de julio de 2019. En 2018 las Naciones Unidas verificaron 102 incidentes de reclutamiento o utilización que afectaron a 453 niños (365 de sexo masculino y 88 de sexo femenino), el 14 % de los cuales eran menores de 15 años cuando fueron reclutados (A/73/907-S/2019/509, párr. 152).

³⁹ “Children are the face of conflict-fuelled humanitarian tragedy in South Sudan – UNICEF”, Servicio de Noticias de las Naciones Unidas, 15 de diciembre de 2017.

⁴⁰ Durante una reunión confidencial celebrada el 19 de octubre de 2019 la Comisión escuchó alegaciones fidedignas de que el mismo Presidente envió fuerzas de la División Tigre para supervisar el reclutamiento.

⁴¹ Durante reuniones confidenciales celebradas los días 16 y 17 de septiembre de 2019 se informó a la Comisión de que en abril de 2019 se desplegó con fines de desarme a un número de soldados de la División 10 estimado en 800 que abrieron un cuartel general en el estado de Warrap (Panachier).

⁴² Referencia a fuerzas del ELPS-O/TD.

⁴³ NRP 102837 – 102841; NRP 102850 – 102857.

⁴⁴ NRP 103459 – 103468.

⁴⁵ NRP 102536 – 102540.

Yuba) (véase el anexo II, párrs. 3 a 5). En algunos casos, se trasladaba y adiestraba a fuerzas de la División Tigre de las FDPSS. Después de que se adiestrara y se facilitara armas a algunos reclutas, presuntamente eran trasladados a ubicaciones más cercanas a Yuba con fines de su despliegue por el Servicio Nacional de Seguridad y las FDPSS, especialmente su División Tigre⁴⁶.

48. En la mayor parte de los casos documentados por la Comisión, el reclutamiento de niños fue deliberado, pues las FDPSS los secuestraban, incluso en Gogrial (Warrap) (anexo II, párrs. 1 a 12). Aparte de las fuerzas gubernamentales, comisionados de condado y jefes locales de Warrap organizaron también mediante campañas sistemáticas el reclutamiento y la utilización de niños para su alistamiento en el Servicio Nacional de Seguridad y las FDPSS. En otros casos, los comisionados extorsionaron a las familias que no podían aportar un miembro de sexo masculino en edad de combatir llevándose ganado, lo cual las dejaba en la indigencia⁴⁷. La Comisión observó una pauta de conducta semejante en Tonj (Warrap), donde las órdenes dictadas por las FDPSS llegaban a comandantes y jefes locales, que a continuación pedían a las familias que propusieran, como mínimo, uno de sus miembros. Si no había hombres disponibles, se exigían niños varones⁴⁸.

49. En el estado de Unidad, niños varones que habían perdido a sus progenitores o habían quedado separados de ellos como consecuencia del conflicto se alistaron a las FDPSS o al ELPS-O/RM de forma “voluntaria” al carecer de medios financieros para mantenerse⁴⁹. Sin embargo, una vez alistados encontraban dificultades para ser puestos en libertad⁵⁰. Los niños recibían de 30 a 50 latigazos por no obedecer órdenes⁵¹.

50. Pese a su experiencia traumática, todos los niños reclutados escapados a los que había entrevistado la Comisión daban muestras de resiliencia, y la mayoría insistían en que deseaban seguir estudiando⁵². Uno de ellos expresó su esperanza de ser médico para mitigar “el sufrimiento de mi pueblo”, que, a su juicio, se veía obligado a recorrer grandes distancias para recibir tratamiento médico adecuado⁵³. Otro niño esperaba ser un día abogado para “dar a las personas sus derechos”⁵⁴.

51. Además, la elevada proporción de jóvenes en la población, sumada al desempleo generalizado y la falta de acceso a la educación, siguió alimentando los delitos violentos y la inestabilidad. Durante el período sobre el que se informa la tasa de desempleo de niños y hombres de 15 a 24 años de edad se mantuvo cercana al 20 %⁵⁵. Cerca de 2,2 millones de niños no estaban escolarizados, mientras que el 30 % de las escuelas de todo el país seguían estando dañadas, destruidas, ocupadas o cerradas a raíz del conflicto⁵⁶. Aunque el número de escuelas en funcionamiento ha aumentado considerablemente desde que el país se independizó en 2011, los jóvenes de Aweil (Bahr el-Ghazal), por ejemplo, mencionaron la falta de acceso al empleo y la educación como factor destacado de su participación en actividades delictivas⁵⁷. Como dijo un joven a la Comisión, “Poseer un arma es beneficioso, pues con ella puede volverse valioso un joven que de otro modo estaría ocioso”⁵⁸.

⁴⁶ NRP 103459 – 103468; véase también el anexo II, párrs. 71 a 86.

⁴⁷ Entrevistas confidenciales corroboraron la labor sistemática de las fuerzas gubernamentales dirigida a reclutar niños en el estado de Warrap; NRP 103200 – 103204.

⁴⁸ NRP 102837 – 102841.

⁴⁹ NRP 103320 – 03323; NRP 103315 – 103319.

⁵⁰ NRP 103315 – 103319.

⁵¹ NRP 103315 – 103319.

⁵² NRP 103205 – 103209; NRP 102530 – 102535; NRP 103200 – 103204.

⁵³ NRP 103200 – 103204.

⁵⁴ NRP 102530 – 102535.

⁵⁵ Véase <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=SS>.

⁵⁶ Véase www.unicef.org/southsudan/media/1831/file/UNICEF-South-Sudan-Education-Briefing-Note-Mar-2019.pdf.

⁵⁷ Emmanuel Kele, “Aweil youth say unemployment makes them engage in criminality”, UNMISS, 7 de mayo de 2019.

⁵⁸ NRP 103445 – 103448.

1. Desarme, desmovilización y reintegración

52. El hecho de que por lo menos 19.000 niños estén presuntamente vinculados con fuerzas gubernamentales y grupos armados de Sudán del Sur pone de manifiesto una grave deficiencia en la aplicación del proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Los días 31 de enero y 21 de febrero de 2019 las FDPSS pusieron en libertad a 40 niños, entre ellos 2 de apenas 8 años de edad, en Tonj Septentrional (Warrap)⁵⁹. La Comisión recibió información de que en junio de 2019 la División 3 de las FDPSS había puesto en libertad a 14 niños de Aguok, Kuac Occidental y Kuac Oriental⁶⁰. En julio el Mecanismo de Vigilancia y Verificación del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad supervisó la puesta en libertad en MirMir (Unidad) de 32 niños soldado de 13 a 17 años de edad que desde 2016 formaban parte de la División B del ELPS-O⁶¹.

53. Durante la semana del 16 de septiembre de 2019, grupos armados de Bahr el-Ghazal Septentrional presuntamente entregaron a casi dos docenas de niños a la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración⁶², nuevamente constituida por el Presidente Kiir en virtud del Decreto Presidencial núm. 123/2019. En el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur se encomienda a la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, integrada por 12 miembros, la gestión de la reintegración de los ex soldados. Aunque el desarme, desmovilización y reintegración de niños en determinadas ubicaciones es un avance positivo, la Comisión observa con preocupación que persiste el reclutamiento en los estados de Wau, Warrap, Unidad y Ecuatoria Central, en este último caso por parte del Frente de Salvación Nacional. Debe ponerse en libertad de inmediato y con las salvaguardias apropiadas a todos los niños, independientemente de dónde fueron reclutados o de la facción responsable de ello.

54. La Comisión expresa su preocupación por el vínculo entre el reclutamiento en curso y las hostilidades que se siguen librando, en particular por lo que se refiere al reclutamiento llevado a cabo por el Frente de Salvación Nacional en Ecuatoria Central. Además, cabe vincular la aceleración de las campañas de reclutamiento organizadas por signatarios del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur y el reclutamiento forzado de niños durante el período sobre el que se informa con la necesidad de llegar a las cifras programadas en relación con el acantonamiento de las fuerzas unificadas necesarias (véase el anterior párrafo 17).

2. Violaciones y presuntos delitos: conclusiones

55. Miembros tanto del ELPS-O/RM como de fuerzas gubernamentales, en particular del Servicio Nacional de Seguridad y de las FDPSS aliadas a Taban Deng, alistaron en sus filas a niños menores de 15 años. En una reunión confidencial celebrada el 8 de enero de 2020 la Comisión se enteró de que se utilizaba a algunos de estos niños como cocineros, guardas y correos, mientras que otros tomaban parte activa en las hostilidades. Algunos recordaban que habían sido adiestrados, provistos de armas, obligados a saquear y obligados a permanecer en los campamentos de instrucción y los campos de batalla mediante amenazas e intimidaciones.

56. El mencionado reclutamiento de niños era contrario al derecho interno y convencional, en particular al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, al que Sudán del Sur se había adherido en septiembre de 2018, y aparece tipificado como delito en el artículo 5 b) del proyecto de estatuto del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur cuando se ven afectados menores de 15 años.

⁵⁹ NRP D120808 – D120810.

⁶⁰ NRP 103364 – 103370.

⁶¹ Informe sobre el estado de aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019, párr. 21.

⁶² Emmanuel Kele/Deng Mou, “Government forces hand over captured child soldiers”, UNMISS, 24 de septiembre de 2019.

57. Asimismo, en el artículo 4, párrafo 3, del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo adicional II) se prohíbe la participación en las hostilidades de niños menores de 15 años. La legislación interna de Sudán del Sur también exige al Estado proteger el interés superior del niño y garantizar que este siempre se tenga en cuenta cuando se adopten decisiones de su incumbencia. A pesar de la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar las infracciones de la ley y ofrecer reparación, el Gobierno de Sudán del Sur ha dejado incumplidos sus deberes.

VII. Conflictos localizados

58. Pese a la reducción general de las hostilidades más virulentas desde la firma del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, y como nuevo indicio de la fragilidad del aparato estatal, se registró una escalada de la competencia violenta por los recursos de pastoreo en localidades donde el estado de derecho estaba totalmente ausente, como la zona del río Jur (Bahr el-Ghazal Occidental), Twic (Warrap), Mayom (Unidad) y Yonglei (véase el anexo II, párrs. 13 a 36).

59. En extensas zonas de la sociedad rural donde la riqueza se mide fundamentalmente con la moneda del ganado, condiciones meteorológicas adversas caracterizadas por estaciones secas y de lluvia bifurcadas, incluidos períodos de inundación y de sequía, provocaron de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 conflictos entre ganaderos y agricultores por el acceso al agua y a los campos de cultivo y de pastoreo. La competencia por esos recursos se vio intensificada no solo por factores vinculados con el clima, sino también por luchas por el dominio y lealtades políticas por motivos de etnia, tribu o subclán.

60. Los conflictos localizados que se libran en todo el país se han caracterizado esencialmente por la ausencia del Estado y del estado de derecho, la proliferación de armamento ligero y pesado y el hecho de que el Estado no haya determinado y alentado una identidad nacional común. La actual experiencia de violencia étnica e intercomunitaria en algunas comunidades es tan intensa y localizada que puede que para ellas la independencia de Sudán del Sur signifique bien poco a efectos de su seguridad cotidiana. Muchas comunidades dicen que la independencia solo ha puesto fin a un determinado tipo de guerra.

61. La Comisión observa con gran preocupación que durante el período sobre el que se informa las partes en conflicto explotaron las rivalidades locales manipulando las divisiones históricas entre comunidades e instrumentalizando las identidades étnicas para marginar a poblaciones consideradas disidentes por una u otra parte y provocar su desplazamiento. Por ejemplo, recibió información fidedigna en el sentido de que miembros de milicias armadas de fuerzas gubernamentales provistos de armas ligeras y pesadas, entre ellas fusiles de asalto AK-47 (Kaláshnikov), granadas propulsadas por cohetes y ametralladoras PK, lanzaron ataques brutales contra las comunidades vecinas, a menudo en época de trashumancia. El hecho de que, de forma deliberada, el Estado no ofreciera seguridad ni exigiera cuentas a los responsables de estos actos presuntamente obligó a los civiles a crear mecanismos propios de autodefensa y a sumarse a agentes armados o tomar parte por ellos a fin de recibir protección. A medida que los conflictos armados de ámbito nacional se transformaron principalmente en conflictos localizados a principios de diciembre de 2018, la Comisión documentó varios incidentes emblemáticos de esta violencia imperante (véase el anexo II, párrs. 13 a 36). Solo entre fines de febrero y mayo de 2019 la UNMISS registró 152 incidentes de violencia localizada que causaron aproximadamente 531 muertos y 317 heridos, lo que representa un aumento del 192 % del número de víctimas con respecto al mismo período de 2018 (S/2019/491, párr. 27).

62. Los ataques lanzados en la zona del río Jur, en Bahr el-Ghazal Occidental, se caracterizaron por asesinatos, violaciones y violencia sexual, secuestros y saqueo y destrucción de bienes (véase el anexo II, párrs. 13 a 36). En una reunión confidencial celebrada el 12 de octubre de 2019 se informó a la Comisión de que, asimismo, el conflicto entre las comunidades apuk y aguok en Gogrial (Warrap) presuntamente tuvo como

consecuencia el asesinato de más de 300 civiles, secuestros de mujeres y niños, incendios de viviendas y la destrucción de bienes civiles e instalaciones médicas.

63. Entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, en la zona fronteriza entre los estados de Unidad y Warrap se registraron numerosos ataques y contraataques librados por bul nuer de Mayom (Unidad), por un lado, y dinka de Tonj y Twic (Warrap), por otro⁶³. En el marco de estos ataques ambas partes causaron cientos de bajas civiles y el saqueo de miles de cabezas de ganado⁶⁴. En Yonglei mantuvieron enfrentamientos semejantes comunidades lou nuer, dinka y murle (véase el anexo II, párrs. 13 a 36).

64. A medida que las autoridades militares y civiles seguían movilizándolo a grupos de ganaderos, la Comisión examinó la medida en que esos grupos se organizaban en torno a una estructura orgánica formal y determinó que numerosos campamentos ganaderos habían establecido una jerarquía formal, en particular para lanzar ataques en Kuajena, Rocrocdong, Udici y Alur, en Wau (Bahr el-Ghazal Occidental). Como afirmó a la Comisión un testigo, “los ganaderos empezaron a organizarse en grupos, y cada dos o tres días teníamos noticias de otro incidente causado por ellos”⁶⁵. La Comisión determinó que, en los casos en que los ganaderos conformaban una jerarquía formal y recibían de partes en conflicto armas pesadas o ligeras, esos grupos de civiles funcionaban como milicias organizadas bajo el mando y control de partes en conflicto.

65. Mientras que el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur se centra principalmente en la solución de conflictos de ámbito nacional, agentes locales se esforzaron en paralelo por sofocar la violencia a escala subnacional (véase el anexo II, párrs. 13 a 36). La Comisión observa con preocupación que, aunque las medidas adoptadas en paralelo para reducir la violencia a escala local siguieron suponiendo un avance positivo, carecieron de repercusión nacional, y el Gobierno nacional no tomó verdadera parte en ellas.

Violaciones y presuntos delitos: conclusiones

66. Aunque el conflicto localizado a menudo se caracteriza por enfrentamientos étnicos tradicionales por el ganado o por actividades delictivas en las que participan ciudadanos particulares, las milicias dispusieron de personal y material, incluidas armas de guerra, suministrados por partes en conflicto. La violencia contra civiles cometida por miembros de fuerzas gubernamentales y grupos armados de la oposición infringió el artículo 3 de los Convenios de Ginebra y las disposiciones del Protocolo adicional II, así como el derecho internacional consuetudinario, y constituyó crímenes de guerra, entre ellos los de asesinato, pillaje, destrucción de bienes y violencia sexual⁶⁶.

67. Se han cometido violaciones y transgresiones manifiestas de los derechos humanos y graves violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto de conflictos localizados, a menudo con la participación de milicias armadas afiliadas a las FDPSS y al ELPS-O/RM. Los civiles sufrieron transgresiones directas como secuestros, reclutamiento forzado, en particular de niños, asesinatos, violencia sexual, malos tratos, secuestros, saqueo y destrucción de bienes, cosechas y otros medios de subsistencia, en particular para adquirir riqueza o ganado (véase el anexo I, mapa 2). En gran parte de estos ataques se observó un impactante desprecio de la vida de los civiles.

68. Además, una serie de incidentes violaron los derechos a la vida y a la propiedad garantizados en los artículos 4 y 14 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. También violaron la Constitución de Transición, en particular en cuanto a los derechos a la vida, a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes y a la propiedad, además del Código Penal de 2008 y las secciones 57 y 206 de la Ley sobre el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán, por las que se prohíben la destrucción y el robo de bienes. La Comisión tiene motivos razonables para creer que estos actos pueden constituir

⁶³ NRP 103303 – 103309; NRP 102974 – 102977; NRP 102978 – 102981; NRP 102982 – 102985. La información procede también de un informe confidencial de una misión sobre el terreno.

⁶⁴ NRP 103303 – 103309.

⁶⁵ NRP 103249 – 103254.

⁶⁶ Comité Internacional de la Cruz Roja, norma 156.

crímenes de guerra⁶⁷ y otros crímenes de derecho internacional graves⁶⁸ tipificados como tales en el proyecto de estatuto del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur.

VIII. Táctica de hacer padecer hambre a la población

69. Durante el período sobre el que se informa, cerca de 6,35 millones de personas que representaban el 54 % de la población se asignaron a las categorías “en situación de crisis” o, peor aún, “en situación de inseguridad alimentaria aguda” (véase también el anexo II, párrs. 37 a 47)⁶⁹. La región del Alto Nilo es la que padece actualmente la mayor inseguridad alimentaria, seguida por la región de Bahr el-Ghazal⁷⁰. En el índice de desarrollo humano de 2019, que mide las dimensiones básicas del desarrollo humano, Sudán del Sur aparecía como el tercer peor Estado nación en el que residir (puesto 186 de un total de 189)⁷¹.

70. La Comisión observa con gran preocupación que, al margen de los factores vinculados con el clima, tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados han impulsado políticas dirigidas a hacer padecer hambre a la población en los estados de Wau y Unidad. Se trataba de políticas concebidas y aplicadas en el marco de una estrategia más amplia orientada a privar de recursos a las comunidades enemigas y, con ello, forzar su capitulación, permitir a los soldados y milicianos que se cobraran su propia recompensa, desplazar por la fuerza a comunidades de tierras ancestrales que luego pudieran expropiarse o, sin más, obligar a las personas a sumarse a distintas facciones que tomaban parte en el conflicto. La denegación del acceso humanitario y el desplazamiento derivados de tácticas ilícitas han agudizado considerablemente el hambre que padece la población en distintas partes del país, lo cual ha privado a cientos de miles de civiles de la posibilidad de atender necesidades esenciales, como el acceso a los alimentos⁷².

71. Sobre la base de la información reunida, la Comisión llega a la conclusión de que existen pruebas incuestionables y suficientes para exigir responsabilidades, conforme al derecho nacional e internacional, a personas, tanto del Gobierno como de la oposición armada, que han impulsado políticas dirigidas a hacer padecer hambre a la población, en particular con arreglo al artículo 8, párrafo 2) e) xix), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que actualmente tipifica como crimen de guerra la práctica intencionada de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra en el marco de un conflicto armado no internacional (véase el anexo II, párrs. 37 a 47)⁷³.

IX. Violencia sexual y de género

72. La violencia sexual y de género, incluida la violencia sexual relacionada con conflictos, siguió siendo un fenómeno extendido y frecuente en Sudán del Sur y se caracterizó por una pauta reconocible de terror y subyugación. Durante el período sobre el que se informa la Comisión documentó infracciones como violaciones individuales y colectivas, mutilación sexual, matrimonio forzado, secuestro y tortura sexualizada⁷⁴. Los niños, incluidas niñas jóvenes, también fueron víctimas de explotación sexual (anexo II, párrs. 1 a 12)⁷⁵.

73. Entre los incidentes de violencia sexual y de género resultantes del conflicto localizado cabe mencionar violaciones individuales y colectivas e incidentes de desnudez

⁶⁷ De conformidad con el artículo 4 a), b), e) y h) del proyecto de estatuto.

⁶⁸ De conformidad con el artículo 5 a) a c) del proyecto de estatuto.

⁶⁹ www.fao.org/in-action/kore/news-and-events/news-details/en/c/1208338.

⁷⁰ Véase www.fao.org/south-sudan/news/detail-events/en/c/1207694.

⁷¹ <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SSD>.

⁷² Véase el documento de sesión A/HRC/43/CRP.1, que puede consultarse en la página web de la Comisión, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoHSouthSudan/Pages/Index.aspx.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ NRP 103469 – 103474; NRP 102632 - 102652.

⁷⁵ NRP 102991 – 102995.

forzada, secuestro, tortura sexualizada y matrimonio forzado⁷⁶. Las pruebas reunidas por la Comisión confirmaron que ganaderos y jóvenes fueron los principales responsables de la violencia sexual en el contexto de conflictos localizados, algunos de ellos pertenecientes a milicias organizadas que operaban bajo el mando y control de fuerzas tanto gubernamentales como de la oposición⁷⁷. Las autoridades locales no han investigado ni enjuiciado ninguno de los casos denunciados (véase el anexo II, párrs. 1 a 12).

X. Denegación constante de derechos y libertades fundamentales

74. Las detenciones y reclusiones arbitrarias, al igual que otras restricciones a las libertades de expresión, opinión y reunión, siguieron caracterizando la vida en Sudán del Sur (anexo II, párrs. 71 a 86). En una reunión confidencial celebrada el 21 de agosto de 2019 se informó a la Comisión de que estaba muy restringido el espacio cívico y político mediante censura y autocensura, lo cual coartaba a los activistas, los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los disidentes políticos y los ciudadanos comunes a efectos de expresar públicamente sus opiniones u organizarse.

75. Además, civiles de Bahr el-Ghazal Occidental, Unidad y Ecuatoria Central fueron testigos de enfrentamientos persistentes que se recrudecieron en abril, junio y agosto de 2019 con aumentos de la escala y la gravedad de las transgresiones, entre ellas secuestros y desapariciones forzadas (véase el anexo II, párrs. 71 a 86). Los testigos indicaron que las desapariciones se caracterizaron por conflictos interétnicos anteriores y por la presencia de grupos armados en estas regiones.

XI. Conclusiones

76. Sobre la base de sus conclusiones, la Comisión tiene motivos razonables para creer que miembros del Gobierno de Sudán del Sur tomaron parte en actos que constituían delitos económicos, en particular evasión de impuestos, blanqueo de dinero, soborno, utilización de la posición personal para influir en las decisiones relativas a la asignación de los recursos del Estado y utilización de fondos públicos para obtener un beneficio o ventaja personal. El desvío ilícito de ingresos privó al Gobierno de recursos decisivos para financiar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

77. También se cometieron violaciones y transgresiones manifiestas de los derechos humanos y graves violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto del reclutamiento y la utilización de niños y de conflictos localizados. Miembros de la División 6A del ELPS-O/RM y fuerzas gubernamentales, entre ellas el Servicio Nacional de Seguridad y la División Tigre de las FDPSS, las Divisiones 3, 4, 5 y 10 de las FDPSS y las FDPSS aliadas a Taban Deng, siguieron reclutando, adiestrando y utilizando niños de apenas 12 años de edad en los estados de Wau, Warrap, Unidad y Ecuatoria Central.

78. Los conflictos localizados de ámbito subnacional se caracterizaron por ataques brutales en los que a menudo participaron milicias armadas organizadas afiliadas a las FDPSS o al ELPS-O/RM. Los civiles sufrieron transgresiones como secuestros, reclutamiento forzado, en particular de niños, asesinatos, violencia sexual, malos tratos, secuestros, saqueo y destrucción de bienes, cosechas y otros medios de subsistencia.

79. La Comisión también reunió pruebas incuestionables y suficientes para exigir responsabilidades, conforme al derecho nacional e internacional, a personas, tanto del Gobierno como de la oposición armada, que han impulsado políticas dirigidas a hacer

⁷⁶ NRP 102664 – 102670; NRP 102660 – 102663; NRP 102627 – 102631; NRP 102680 – 102688; NRP 102609 – 102617; NRP 102632 – 102652.

⁷⁷ NRP 102680 – 102688; NRP 102632 – 102652; NRP 102653 – 102659.

padecer hambre a la población, en particular en los estados de Wau y Unidad (véase también el anexo II, párrs. 37 a 47)⁷⁸.

80. Siguieron siendo frecuentes y extendidos los incidentes de violencia sexual y de género, incluida la violencia sexual relacionada con conflictos, incluso en el contexto de conflictos localizados, que se caracterizaron por una pauta de terror y subyugación. La Comisión documentó infracciones como violaciones individuales y colectivas, mutilación sexual, matrimonio forzado, secuestro y tortura sexualizada. Los niños, incluidas niñas jóvenes, también fueron víctimas de explotación sexual (véase también el anexo II, párrs. 1 a 12).

81. Las detenciones y reclusiones arbitrarias, al igual que otras restricciones a las libertades de expresión, opinión y reunión, siguieron caracterizando la vida cotidiana en Sudán del Sur mediante actos que infringían el derecho a la información y a la expresión y las libertades de asociación y reunión que se enuncian en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Además, mediante actos continuos de desaparición forzada Sudán del Sur incumplió su obligación de investigar de buena fe todas las alegaciones de violaciones de los derechos humanos, en particular en los casos en que solo las autoridades disponían de información al respecto (véase también el anexo II, párrs. 71 a 86).

XII. Recomendaciones

82. La Comisión recomienda al Gobierno de Sudán del Sur que:

a) Vele por que los altos funcionarios hagan declaraciones escritas de sus bienes antes de asumir un cargo público y, posteriormente, con carácter anual, de conformidad con el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Lucha contra la Corrupción de Sudán del Sur (2009), e introduzca legislación que tipifique como delito penal la prestación de declaraciones falsas;

b) Colabore con otros Estados en la recuperación y repatriación de los beneficios derivados de actividades corruptas, con inclusión de la propiedad inmobiliaria adquirida en países vecinos y otros países y los fondos mantenidos en cuentas extranjeras, y recabe asistencia para investigar y enjuiciar a los responsables;

c) Reajuste las prioridades en materia de gastos y destine recursos a la atención de las necesidades de los ciudadanos, en particular garantizando el derecho a no pasar hambre y otros derechos económicos, sociales y culturales y un nivel de vida mejorado;

d) Refuerce la independencia y la capacidad del poder judicial y las instituciones judiciales nacionales, en particular las que no se encuentran en Yuba;

e) Cumpla urgentemente todas las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entre otras cosas absteniéndose de dirigir ataques contra civiles;

f) Deposite sin demora ante el Secretario General instrumentos de adhesión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los primeros protocolos de ambos, todos ellos ratificados por la Asamblea Legislativa Nacional de Transición;

g) Firme o ratifique sin demora los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos dirigidos a fortalecer la promoción y la protección de los derechos y libertades fundamentales de la población o se adhiera a ellos; y, en particular, vele por que Sudán del Sur pase a ser parte en la Convención

⁷⁸ Véase también el documento de sesión en el que figuran constataciones adicionales de la Comisión (A/HRC/43/CRP.1). Puede consultarse en la página web de la Comisión, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoHSouthSudan/Pages/Index.aspx.

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que pasaría a complementar la legislación nacional;

h) Pase a ser parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en el Protocolo de Enmiendas al Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos o acepte la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para garantizar la rendición de cuentas respecto de las violaciones de los derechos humanos y los delitos graves que se perpetran en el país;

i) Adopte las medidas necesarias para abordar y romper los ciclos de conflicto localizado, en particular aplicando las resoluciones aprobadas en las correspondientes conferencias de paz, como la conferencia de Kwacjoc, celebrada en agosto de 2018, la conferencia de Mankien, celebrada en junio de 2019, y la conferencia triestatal, celebrada en julio de 2019;

j) Establezca tribunales especiales y emprenda investigaciones imparciales para exigir responsabilidades a los autores y ofrezca indemnización a las víctimas y sus familiares;

k) Promueva programas eficaces de desarme, desmovilización y reintegración;

l) Fortalezca las medidas de promoción del desarme, la desmovilización y la reintegración, en particular elaborando legislación y reglamentos relativos a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad a efectos de mantener y almacenar armas;

m) Amplíe la inversión en programas relacionados con el desarme, la desmovilización y la reintegración de niños que incluyan actividades de apoyo psicosocial, educación, formación profesional y empleo de jóvenes;

n) Vele por que la violencia de género contra la mujer se aborde eficazmente sin remitirla a un procedimiento de solución de controversias por vías alternativas, como la mediación y la conciliación;

o) Designe de inmediato un representante especial sobre violencia sexual y de género conforme a lo recomendado por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución S-26/1;

p) Ejecute plenamente el plan de acción para la prevención de la violencia sexual en los conflictos en cumplimiento de los compromisos asumidos en el comunicado conjunto del Gobierno de Sudán del Sur y la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos;

q) Vele por que el sistema de justicia nacional armonice los sistemas jurídicos plurales para proteger a los supervivientes de la violencia de género, garantizando el acceso a la justicia y a la reparación, incluido un recurso efectivo, de conformidad con la orientación proporcionada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia;

r) Vele por que se investigue debidamente la violencia sexual relacionada con el conflicto y por que se enjuicie a sus autores;

s) Vele por que todas las comunidades tengan acceso rápido, sostenido y sin trabas a la ayuda humanitaria, dando prioridad a las necesidades acuciantes de los civiles de la región del Alto Nilo y la región de Bahr el-Ghazal, y adopte medidas dirigidas a exigir responsabilidades a los agentes estatales y no estatales que obstruyan o desvíen ilícitamente la asistencia humanitaria;

t) Ponga fin a toda injerencia en las actividades de los medios de comunicación y la sociedad civil y garantice las libertades de expresión y de reunión;

u) Agilice el establecimiento sin demoras de los mecanismos previstos en el capítulo V para proceder a una aplicación integral de la justicia de transición;

v) Vele por que se investiguen debidamente todas las violaciones y abusos, por que se enjuicie a los responsables y por que se ofrezcan recursos efectivos a las víctimas;

w) Establezca sin demoras una Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Regeneración, velando por que se mantengan consultas eficaces y transparentes con los interesados sursudaneses y por que el proceso de selección de comisionados sea transparente y creíble;

x) Vele por que se consulte e incluya a todos los sursudaneses, con inclusión de las mujeres, los jóvenes, las personas de edad, los niños, los desplazados y los refugiados, y por que todos ellos participen de manera efectiva en la elaboración y aplicación de los mecanismos previstos en el capítulo V;

y) Facilite la participación de la sociedad civil en la creación de conciencia sobre los mecanismos de justicia de transición y promueva la defensa de mecanismos de justicia y rendición de cuentas a fin de ampliar los conocimientos de los ciudadanos y mejorar su participación en los procesos de justicia de transición;

z) Adopte y promueva un enfoque amplio en cuanto a las reparaciones, en particular velando por que se destine a ellas por lo menos un 1 % de los ingresos derivados del petróleo y adoptando otras medidas no monetarias;

aa) Facilite a las víctimas y sus familiares reparación y recursos adecuados, rápidos y efectivos, en particular a efectos de conocer la verdad acerca de las violaciones sufridas y la suerte o el paradero de seres queridos desaparecidos mientras se hallaban bajo la custodia del Estado;

bb) Ratifique el Protocolo de la Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo al Establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y haga una declaración a efectos de permitir la presentación de recursos individuales a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;

cc) Mediante mecanismos nacionales, regionales e internacionales, adopte medidas y preste apoyo para investigar y enjuiciar a los máximos responsables de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en Sudán del Sur.

83. La Comisión recomienda a los Estados Miembros que:

a) Supervisen y apliquen el embargo de armas vinculado con el conflicto nacional en curso, en particular en Ecuatoria Central y Maiwut, y detengan el suministro de armas a las partes beligerantes;

b) Ejercen su competencia a efectos de exigir responsabilidades a los autores de violaciones y abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario;

c) Tipifiquen como crimen de guerra en su legislación nacional, si no lo han hecho ya, la táctica de hacer padecer hambre a la población civil.

84. La Comisión recomienda a la Unión Africana que:

a) Vele por que las partes sursudanesas solucionen las diferencias pendientes a fin de resolver el conflicto y velar por la formación oportuna del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado;

b) Se mantenga en contacto con el Gobierno de Sudán del Sur y le ayude a adoptar las medidas necesarias para establecer el Tribunal Híbrido y otros procesos y mecanismos de justicia de transición y determine un calendario al respecto;

c) Emprenda preparativos para imprevistos a fin de establecer un Tribunal Híbrido de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo de Paz y Seguridad, en caso de que el Gobierno de Sudán del Sur incumpla el calendario fijado para el establecimiento del Tribunal;

d) Instituya procesos dirigidos a reunir y preservar pruebas a modo de preparativo para la formación del Tribunal Híbrido.

85. La Comisión recomienda a las Naciones Unidas y a los asociados internacionales que:

a) Velen por que las partes solucionen las diferencias que tengan pendientes a fin de resolver el conflicto y velar por la formación oportuna del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado;

b) Se mantengan en contacto con los interesados de ámbito nacional y subnacional y les presten apoyo para establecer los marcos jurídicos y normativos necesarios para respaldar las instituciones de justicia de transición, en particular el Tribunal Híbrido.

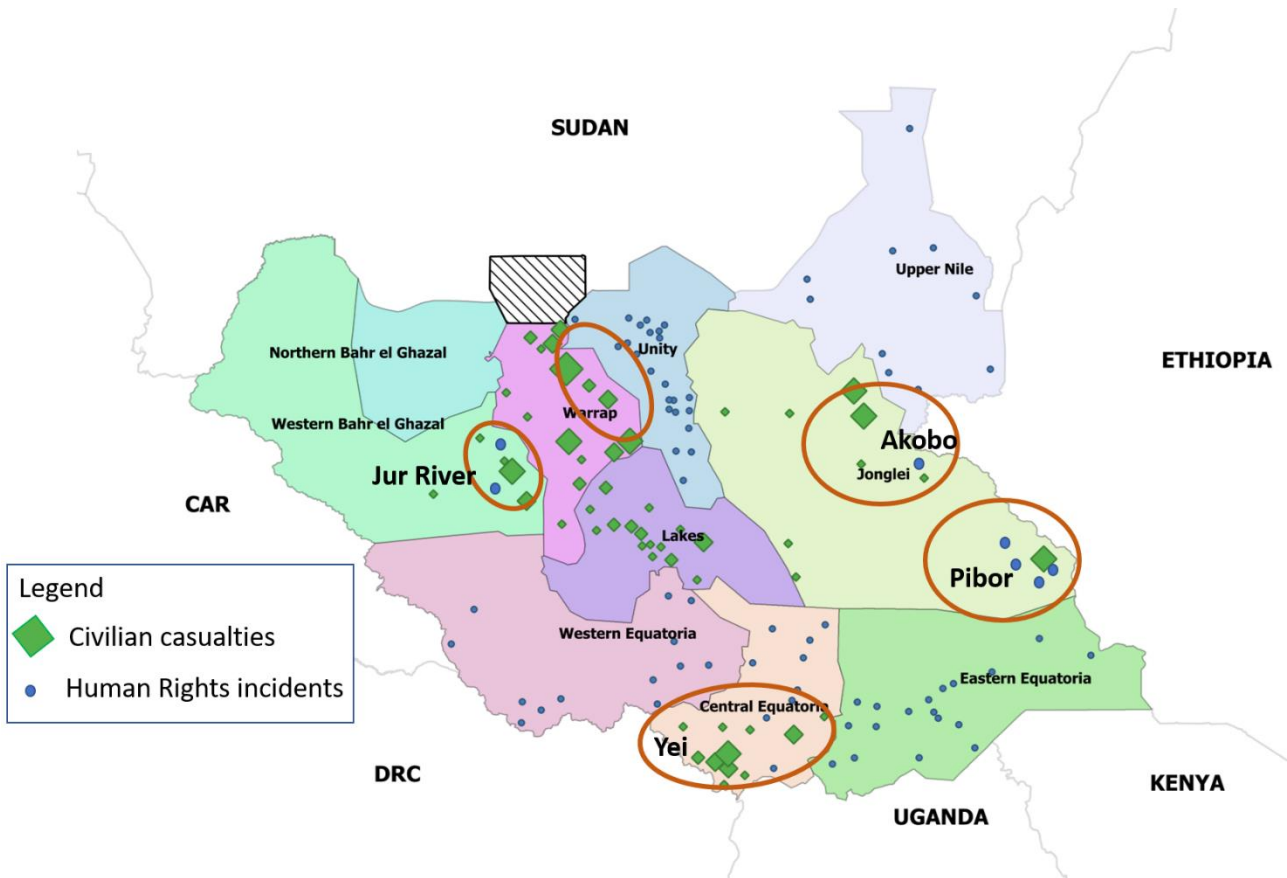
86. La Comisión recomienda que en los informes públicos que presente el Mecanismo de Vigilancia y Verificación del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad siga figurando información sobre las preocupaciones suscitadas por la protección de civiles, en particular por lo que se refiere a la utilización de niños y la violencia sexual y de género.

87. La Comisión recomienda a la UNMISS y a las organizaciones no gubernamentales que:

a) Refuercen las investigaciones relativas a sus miembros del personal nacional asesinados en relación con el ejercicio de sus funciones y presten apoyo a sus familiares, en particular apoyo psicosocial e indemnizaciones;

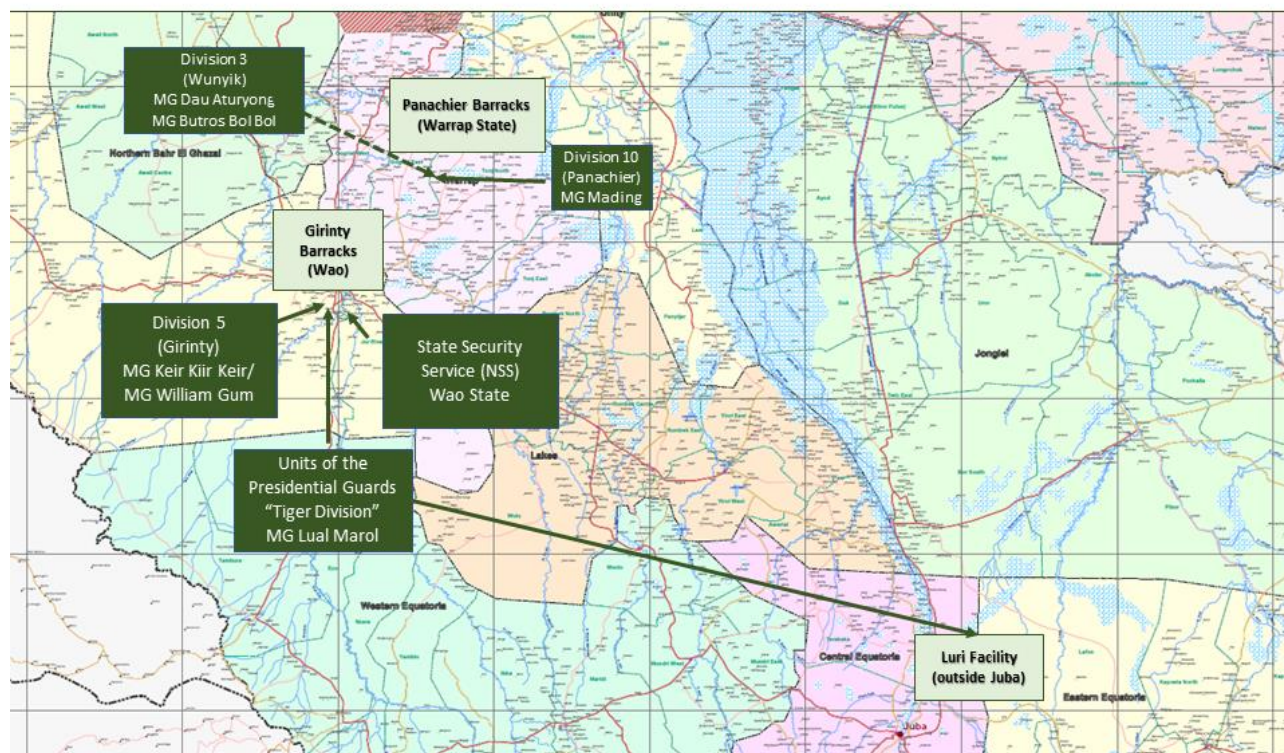
b) Sigam prestando apoyo a la aplicación de los mecanismos de justicia de transición previstos en el capítulo V del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur de conformidad con las mejores prácticas y normas.

2. Localized conflict locations

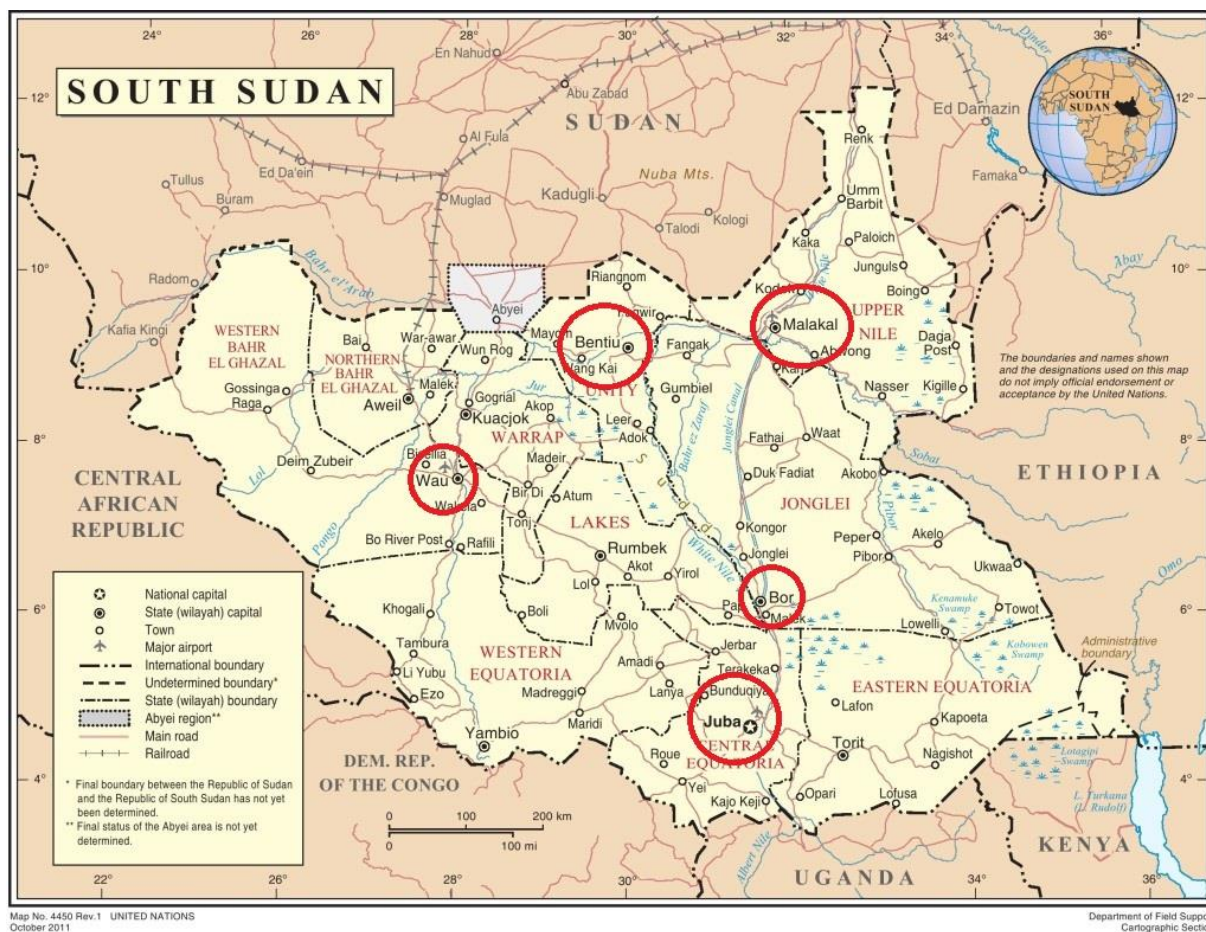


3. Military bases/barracks (child recruitment and use)

Facilities for new recruits (2018-2019)



4. Protection of civilian displacement sites



12 November 2019

UNMISS “Protection of Civilians” (PoC) Sites

As of 7 Nov. 2019, a total of number of civilians seeking safety in six Protection of Civilians (PoC) sites located on UNMISS bases is **190,455** including 117,767 in Bentiu, 26,359 in Malakal, 29,702 in Juba UN House, 1,931 in Bor, and 14,696 in the area adjacent to UNMISS in Wau “.

Region	Location	Number of Civilians Seeking Protection
Central Equatoria	UN House PoC I & III	29,702
Unity	Bentiu	117,767
Upper Nile	Malakal	26,359
Jonglei	Bor	1,931
Area Adjacent to UNMISS in Wau	AA	14,696
TOTAL		190,455

Source: The figures reported are based on Biometric Registration conducted by IOM in Bor (May 2019), UN House (February 2019), Wau Adjacent Area (August 2019), and the headcounts conducted in in Bentiu (July 2019) and DRC headcount for Malakal (June 2019).

Annex II

Additional findings

I. Recruitment and use of children – emblematic incidents⁷⁹

1. Accounts received by the Commission from former child soldiers paint a picture of violent recruitment campaigns, harsh military training,⁸⁰ inhuman living conditions,⁸¹ frequent abuse and ill-treatment and the denial of education,⁸² adequate medical care⁸³ and communication with parents or relatives. In so doing, government forces violated both the Child Act of South Sudan and the SPLA Act which prohibit the recruitment of children in military forces and require all actors to consider the best interest of the child.

A. Warrap State

Gogrial

2. The Commission spoke with a boy from Gogrial who recalled how, one day in December 2018, a green and brown “technical” pick-up truck arrived at his home.⁸⁴ Immediately upon arrival, SSPDF Tiger Division soldiers yelled at, handcuffed, and threw the boy into the back of their truck where four other boys aged 16 to 17 years were also confined.⁸⁵ Unaware of why he was being accosted or that he was being forcibly recruited, the boy recalled being “afraid they would kill us”.⁸⁶

3. SSPDF Tiger Division soldiers drove the boys to the Division 5 Girinty Military Barracks in neighbouring Wau (Western Bahr el Ghazal). At around 10.00 a.m. the following morning, boys and men were transferred to the National Security Service (NSS) training facility in Luri closer to Juba in *wara* trucks.⁸⁷ There, the boy was able to identify by name a Tiger Division soldier wearing a khaki, black, and green camouflage print uniform who began training the recruits—teaching him military drills including how to crawl, as well as other conditioning methods. He was further taught how to do push-ups and kneel as “punishment”.⁸⁸

4. Overall, the boy estimated 500 trainees at the Luri facility,⁸⁹ comprising men and boys. Explaining daily life in Luri, he recalled how some adult conscripts would cook, while boys washed dishes, and how he was denied adequate food and fed merely beans twice a day.⁹⁰ Recruits slept in “blue houses” situated near the training grounds, and their freedom of movement was confined to the training facility.⁹¹

5. Children at the Luri training facility were further tortured by drunk soldiers, and “punished” when food was not prepared. On one occasion, the boy recalled being lashed with a whip fashioned of leather.⁹² Other forms of torture included Tiger Division soldiers forcing children to lie on the ground while their necks were stepped on.⁹³ Tiger Division soldiers further denied medical care to recruits in Luri, which led in at least one case to the

⁷⁹ Certain details concealed subject to the principle of “do no harm”.

⁸⁰ Child Act 2008, at Art. 31.

⁸¹ Ibid. at Art. 6.

⁸² Ibid. at Art. 14.

⁸³ Ibid. at Art. 15.

⁸⁴ ERN 103205 - 103209, paras. 4-5.

⁸⁵ ERN 103205 - 103209, paras. 3-4.

⁸⁶ ERN 103205 - 103209, para. 3.

⁸⁷ ERN 103205 - 103209, para. 7.

⁸⁸ ERN 103205 - 103209, para. 7.

⁸⁹ ERN 103205 - 103209, para. 8.

⁹⁰ ERN 103205 - 103209, para. 9.

⁹¹ ERN 103205 - 103209, para. 10.

⁹² ERN 103205 - 103209, para. 12.

⁹³ ERN 103205 - 103209, para. 13.

preventable death the boy witnessed.⁹⁴ The boy was able to escape from the Luri facility earlier this year.⁹⁵

6. The Commission further received credible information that County Commissioners in Gogrial, Tonj, and Twic executed Government orders to recruit children, including through the use of recruitment centres in Gogrial.⁹⁶ County Commissioners in at least three locales were said to have pressured local chiefs and cattle camp leaders to ask families within their communities to volunteer for conscription.⁹⁷ In February 2019, the Executive Chief of Aguek (central Gogrial County), for example, requested that local families relinquish at least one fighting age male to join the SSPDF.⁹⁸ When a 17-year-old boy was urged by his family to represent them in the recruitment drive, he began hiding.⁹⁹ Days later, he was surrounded in public by three soldiers armed with Kalashnikovs and donning matching khaki and green camouflage SSPDF uniforms bearing the national flag on their sleeves.¹⁰⁰ To force his submission, two soldiers beat him with black batons, while the third pushed him.¹⁰¹

7. The boy was taken by the soldiers to an SSPDF Division 3 training centre in Aguek and described a Captain who bore three stars on his uniform as being in charge of the centre.¹⁰² Every day at 6.00 a.m. while at the centre, he and other recruits were awoken by SSPDF soldiers to go running. Though he recalled crying as he was marching, an assembly master watched over to ensure his subjugation. Recruits were insufficiently fed, receiving only beans and *porso* twice a day, and further forced into labour/made to collect firewood.¹⁰³

8. Soldiers training the youth in Aguek had informed the boy that he would later be taken to a main military training centre in Panachier, and that there he would be made to run, collect firewood, cook, and undergo further military training.¹⁰⁴ The Commission was able to confirm that the main SSPDF Division 3 training centre in Gogrial County is based in Panachier,¹⁰⁵ and that SSPDF Division 10 forces also moved to Panachier in April 2019.¹⁰⁶ In Aguek, SSPDF Division 3 soldiers told recruits that, once they completed training in Panachier, they would be deployed due to insecurity in Gogrial (Warrap), Malakal, Abyei, and “other areas where there are land disputes”.¹⁰⁷ After five days, the boy attempted a risky albeit successful escape.¹⁰⁸

B. Western Bahr el Ghazal State

9. As in Warrap State, the Commission received credible information that, beginning in November 2018, SSPDF Division 5 members began recruiting boys in Wau (Western Bahr el Ghazal), including homeless boys from neighbouring Gogrial who had escaped to Wau to evade recruitment. In April 2019, boys in Wau were taken to the SSPDF Division 5 Girinty Barracks.¹⁰⁹ One witness recalled that, on 11 April 2019, SSPDF Division 5

⁹⁴ ERN 103205 - 103209, para. 14.

⁹⁵ ERN 103205 - 103209, para. 18.

⁹⁶ ERN 102536 - 102540, para. 5. Recruitment centres were located in Kuac West, Kuac East, Kuac North, and Kuac South.

⁹⁷ ERN 102536 - 102540, para. 6.

⁹⁸ ERN 102530 - 102535, para. 5.

⁹⁹ ERN 102530 - 102535, paras. 5-6.

¹⁰⁰ ERN 102530 - 102535, para. 6.

¹⁰¹ ERN 102530 - 102535, para. 7.

¹⁰² ERN 102530 - 102535, para. 8.

¹⁰³ ERN 102530 - 102535, para. 10.

¹⁰⁴ ERN 102530 - 102535, para. 14.

¹⁰⁵ See, e.g., ERN 102530 - 102535, para. 14, ERN 102536 - 102540, para. 12; Confidential Meeting, 19 October 2019.

¹⁰⁶ Confidential Meeting, 19 October 2019.

¹⁰⁷ ERN 102530 - 102535, para. 14.

¹⁰⁸ ERN 102530 - 102535, para. 15.

¹⁰⁹ ERN 102803 - 102810, para. 18; ERN 102797 - 102802, para. 16.

Military Intelligence Officers rounded up homeless boys in Wau and placed them onto a truck, as they had been “ordered to take the children to Nyakuael” (Tonj).¹¹⁰

C. Unity State

10. In furtherance of a pattern previously documented by the Commission, credible information was received that boys remain within the ranks of the Taban Deng-allied SSPDF in Unity State.¹¹¹ The Commission further received information that a 17-year-old boy, recruited by the SPLA-IO (RM) when he was 13, was seen in September 2019 together with SPLA-IO (RM) soldiers at the market in Adok, Leer County.¹¹² The Taban Deng-allied SSPDF is listed in the annex of the latest Secretary-General report on children and armed conflict as persistent perpetrators of grave violations against children, including recruitment and use.¹¹³

11. In April 2019, approximately 500 South Sudanese civilians, most of them women and children alongside approximately 50 men, travelled from Khartoum (Sudan) to Rubkona town,¹¹⁴ following an offer by National Patriotic Alliance Forces (NPAF)¹¹⁵ of free transportation believed to have been paid by the First Vice President Taban Deng.¹¹⁶ Upon arriving in Rubkona town, they were transported to the joint barracks of the then SPLA-IO (TD) and the NPAF¹¹⁷ in Tong, Rubkona County.¹¹⁸ In Tong, young men were separated from their families for recruitment by NPAF.¹¹⁹ Approximately 17 men who refused to be recruited were detained,¹²⁰ among them between three and four minors.¹²¹ By July-August 2019, most detainees had either escaped or were released.¹²²

12. At the end of November 2019, the National Patriotic Alliance Forces forcefully recruited a 14-year-old boy outside of the Bentiu POC site,¹²³ who was able to escape some five weeks later.¹²⁴

Facilities for new recruits between 2018 and 2019 are mapped in annex I, map 4.

II. Localized conflict(s) – emblematic incidents

13. While the Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS) addressed the conflict at a national level, less attention has been focused on addressing localized conflict(s). Legacies of conflict and inter-communal violence which have played out between and within ethnic groups¹²⁵ have long roots, but

¹¹⁰ ERN 102797 - 102802, para. 16.

¹¹¹ In September and October 2018. See, e.g., ERN 101626 - 101631, para. 13; ERN 101638 - 101642, para. 10; Confidential Meeting, 21 September 2018.

¹¹² ERN 103279 - 103284, paras. 3-4.

¹¹³ Report of the Secretary-General on children and armed conflict, UN Security Council, A/73/907-S/2019/509, 20 June 2019, at Annex I, p. 40.

¹¹⁴ ERN 103101 - 103104, para. 6, ERN 103097 - 103100, para. 8, ERN 103064 - 103068, paras. 4 and 9.

¹¹⁵ The NPAF are based in Tong (Unity) in the same barracks as SSPDF (former SPLA-IO (TD)). They are aligned to SSPDF though not yet integrated.

¹¹⁶ ERN 103101 - 103104, para. 8, ERN 103097 - 103100, para. 8.

¹¹⁷ Following the dismissal of General Robert Ruai Kuol Jal from the position as SPLA-IO Military Governor for Liech (Unity) State by SPLM/ SPLA-IO Chairman Rick Machar end of 2017, the General founded the NPAF (ERN 103101 - 103104, para. 5; and ERN 103097 - 103100, para. 7). His forces settled in Tong in November 2018 and aligned with the then SPLA-IO (TD) Forces (ERN 103101 - 103104 para. 5; ERN 103097 - 103100 para. 7; Investigator’s Report).

¹¹⁸ ERN 103101 - 103104, para. 9; ERN 103097 - 103100, paras. 8 and 10; ERN 103064 - 103068.

¹¹⁹ ERN 103064 - 103068, paras. 7 and 9.

¹²⁰ ERN 103101 - 103104, para. 10; ERN 103064 - 103068, para. 9.

¹²¹ ERN 103101 - 103104, para. 10; ERN 103064 - 103068, para. 9.

¹²² ERN 103097 - 103100, para. 10; ERN 103064 - 103068, para. 13.

¹²³ ERN 103310 - 103310, para. 22.

¹²⁴ ERN 103310 - 103310, para. 25.

¹²⁵ Acknowledging that some of the deadliest attacks perpetrated this year were among Dinka sub-clans.

these conflicts have been exacerbated by new actors, new competitions over resources and the mismanagement and abuse of transhumance. A failure to properly understand the drivers of local conflicts will result in flawed solutions and continue to grow into one of the greatest challenges to long-term peace, stability and human security in South Sudan.¹²⁶

A. Jur River (Western Bahr el Ghazal)

14. Members of the Luo community from Western Bahr el Ghazal and cattle keepers from the Dinka community in Warrap told the Commission they had lived in peace for decades, even residing within the same communities and intermarrying. Over time, however, the relationship between the two groups fractured, escalating into violent clashes. In 2016, the Marial Bai Agreement was introduced to govern cattle migration and initially seemed to quell hostilities. However, interlocutors told the Commission that tension between these ethnic groups began to resurface after the introduction of administrative boundaries in January 2017 which engineered state borders with the intention of accumulating resources to benefit the Dinka community, furthering the ethnic divide.¹²⁷

15. As early as November 2018, cattle keepers from the Dinka community in Tonj (Warrap) began migrating through the neighboring Jur River area of Wau (Western Bahr el Ghazal) in violation of the Marial Bai Agreement which specifies that migration is to commence each January, the start of the dry season.¹²⁸ Other key provisions of the agreement were also violated in that the cattle camp leaders failed to seek the written consent of local chiefs in Wau (Western Bahr el Ghazal) prior to their migration from Tonj (Warrap);¹²⁹ cattle keepers were not supposed to travel with arms, but were to use sticks and spears to guide their cattle; and the cattle keepers did not compensate farmers for damaged crops.¹³⁰ Further compounding the dispute was that the previous Marial Bai Agreement failed to take account of the on-going conflict in that SPLA-IO (RM) forces were stationed along the migration route.¹³¹ Interlocutors also indicated that a greater number of cattle keepers participated in this year's migration, increasing the level of damage to the Luo community's crops leading up to the harvest.¹³²

16. Accounts differ as to how the violence began, with both communities blaming the other. However, after 6 March 2019, the attacks intensified when cattle keepers from the Dinka community in Tonj (Warrap) returned to Jur River in search of pastoral land but allegedly raped a girl while she was fetching water.¹³³ The pastoralists retaliated, reportedly killing a cattle keeper in Akou in Tonj (Warrap).¹³⁴ Cattle keepers described as wearing blue *jalabiya* (tunics) proceeded to launch a brutal attack in Kuajena on 17 March 2019, killing nine people and wounding six others (five children and one woman), including a mother whose baby was only a few days old when she was killed.¹³⁵ As one witness told the

¹²⁶ Wild, Hannah & Jok, Jok & Patel, Ronak. (2018). The militarization of cattle raiding in South Sudan: how a traditional practice became a tool for political violence. *Journal of International Humanitarian Action*; See also Saferworld (2017). *Informal armies: community defence groups in South Sudan's civil war*; Idris, Iffat. (2018). *Livestock and Conflict in South Sudan*. K4D Helpdesk Report 484. Brighton, UK: Institute of Development Studies.

¹²⁷ A/HRC/40/CRP.1; ERN 102707 - 102717, para. 9; ERN 102632 - 102652, para. 7-10. See also Wau Displacement Sites: Influx from Jur River March-June 2019, IOM Displacement Tracking Matrix, available at https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/20190816%20IOM%20DTM%20Jur%20River%20displacement%20to%20Wau%20thematic%20report_1.pdf?file=1&type=node&id=6443.

¹²⁸ ERN 102675 - 102679, para.6; Confidential Meeting, 22 September 2019.

¹²⁹ ERN 103249 - 103254.

¹³⁰ ERN 103249 - 103254; ERN 102632 - 102652, para. 7-11; Confidential Meeting, 22 September 2019.

¹³¹ ERN 102632 - 102652, paras. 7-11; Confidential Meeting, 22 September 2019.

¹³² Confidential Meeting, 22 September 2019.

¹³³ ERN 102632 -102652, para. 14; Confidential meeting, 9 July 2019.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ ERN 103249 - 103254; ERN 102632 - 102652, paras. 15-21; ERN 102707 - 102717, para. 12; ERN 102671 - 102674, para. 5; ERN 102680 - 102688, paras. 7-10; ERN 103364 - 103370.

Commission, “After that, I constantly lived in fear in [location concealed] so I came to Wau . . .”¹³⁶

17. Thereafter, recurrent retaliatory attacks marked by killings, rape, abduction and the looting and destruction of property ensued across Kuajena, Rocrocdong, Udici and Alur in Wau (Western Bahr el Ghazal). As one witness told the Commission, “The cattle keepers started organizing themselves in groups . . . and every two to three days, we would hear about another incident.”¹³⁷ On 1 April 2019, for instance, a deadly attack launched by cattle keepers on a primary school sheltering internally displaced persons (IDPs) from the Luo community in Kuajena resulted in the death of at least 11 civilians.¹³⁸ Eyewitnesses indicated that State security forces who had been deployed to protect the IDPs failed to intervene during the attack.¹³⁹ NSS officers subsequently dispatched to guard civilians sheltering in the school allegedly tortured them and compelled them to do forced labour.¹⁴⁰ UNMISS and CTSAMVM patrols sent to monitor the situation were repeatedly denied access to the school.¹⁴¹ Eventually, the NSS soldiers were withdrawn from the school in August 2019. At the time, the Commission was informed that the NSS would not be investigating the officers’ alleged misconduct.¹⁴²

18. On 18 May 2019, cattle keepers from the Dinka community wearing blue *jalabiya* launched another attack on a Luo community in Rocrocdong (Western Bahr el Ghazal) which killed at least two individuals, including an elderly village chief.¹⁴³ During the incident, the cattle keepers reportedly separated the men from the women and shouted ethnic slurs.¹⁴⁴ They proceeded to shoot the village chief in the back of his head with a Kalashnikov rifle before burning the village *tukuls* and ordering the villagers to leave the land. As they fled the scene, the cattle keepers also set the village chief’s body on fire and looted food items, goats and cattle.¹⁴⁵ During another similar attack in Rocrocdong, one 17-year-old girl told the Commission, “The attackers did not do anything to me. However, I saw them taking girls. I do not know how many they took [or what] happened to these girls after they took them. I was busy running away with my children.”¹⁴⁶

19. The same month, the International Organization for Migration reported that more than 12,346 persons were displaced from the Jur River area, with 99 per cent of new arrivals citing conflict as the reason for their entry into UN Protection of Civilians site and other IDP collective sites.¹⁴⁷ Thirteen per cent of these IDPs reported having housing or property destroyed.¹⁴⁸ Meanwhile, half of all new arrivals reported having been displaced twice since 2013, while approximately 35 per cent indicated it was their first experience of displacement.¹⁴⁹

20. When cattle keepers from the Dinka community launched another attack in Rocrocdong on 18 June 2019, one teenage girl who escaped abduction described her attackers as, “. . . mainly young boys wearing blue *jalabiya* . . . they were speaking the

¹³⁶ ERN 102707 - 102717, para. 15.

¹³⁷ ERN 103249 - 103254.

¹³⁸ ERN 102546 - 102552, para. 9; ERN 102664 - 102670, para. 12-13; ERN 102632 - 102652, para. 23.

¹³⁹ ERN 102797 - 102802; ERN 102632 - 102652, paras. 24-25.

¹⁴⁰ ERN 102872 - 102876, para. 12; ERN 102632 - 102652, paras. 21-31; and ERN 103269 - 103273. The Commission received information that female IDPs at the site were sexually assaulted but further investigations are needed. ERN 102699 - 102706, para. 19; ERN 102632 - 102652, paras. 25-31.

¹⁴¹ Confidential documents on file with the Commission

¹⁴² Confidential meeting, 1 August 2019.

¹⁴³ ERN 102689 - 102698; ERN 102594 - 102600, paras. 9-13; ERN 103142 - 103145; ERN 102675 - 102679, para.11; ERN 102609 - 102617, para. 5.

¹⁴⁴ ERN 102689 - 102690, paras. 10-11.

¹⁴⁵ ERN 102689 - 102690, para. 4; ERN 102594 - 102600, paras. 9-13.

¹⁴⁶ ERN 103137 - 103141.

¹⁴⁷ Wau Displacement Sites: Influx from Jur River March-June 2019, IOM Displacement Tracking Matrix, 16 July 2019, available at https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/20190816%20IOM%20DTM%20Jur%20River%20displacement%20to%20Wau%20thematic%20report_1.pdf?file=1&type=node&id=6443.

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid.

Dinka language and saying they didn't want the Luo there . . ."¹⁵⁰ The witness further recounted how the cattle keepers arrived in the village brandishing AK-47s and PKMs which they used to kill at least 11 people near a school before looting all of the food in the village.¹⁵¹ Other witnesses indicated that SSPDF Division 5 soldiers who were present failed to intervene during the attack, but came to collect the dead bodies afterwards.¹⁵²

21. In several such incidents documented by the Commission, eyewitnesses had previously interacted with the cattle keepers and were able to identify by name the cattle camps and individuals who carried out the attacks on their villages.¹⁵³ Additionally, several interlocutors indicated the cattle being migrated belonged to high-ranking Government officials¹⁵⁴ who had engaged the cattle keepers to guard their cattle and provided them with ammunition and small-arms, as well as heavy weapons such as PKMs and RPGs.¹⁵⁵ Soldiers from SSPDF Division 5 reportedly played a key role in arming the cattle keepers from Tonj as they were from the same Dinka ethnic group.¹⁵⁶ The Commission also received information about County Commissioners and a high-ranking government official allegedly opening the stores from previous disarmament initiatives to provide cattle keepers weapons.¹⁵⁷

22. Local communities informed Commission investigators that by August 2019, youth self-defence groups had emerged to protect themselves and their communities against such attacks.¹⁵⁸ Youth were able to purchase their weapons from SSPDF soldiers who needed the income because they had not been paid their salaries.¹⁵⁹ One youth leader told the Commission he had purchased his AK-47 from an SSPDF soldier for 60,000 SSP.¹⁶⁰

23. As the SPLA-IO (RM) Division 6a forces were accused of being involved in counterattacks against the cattle keepers and other members of the Dinka community,¹⁶¹ the Commission observed that Government security forces began to target Luo youth, often accusing them of being rebels which in turn led some of these youth to seek protection by joining the armed opposition group.¹⁶² In other instances, Luo commanders affiliated with SPLA-IO (RM) sought to avenge attacks which involved their community by recruiting, at times forcefully, from among the youth, in violation of the cessation of hostilities agreement.¹⁶³

24. Between 3 and 6 July 2019, a Tri-State Peace Conference was held between Gogrial (Warrap), Wau (Western Bahr el Ghazal) and Tonj (Warrap) where members signed a deal resolving to cease hostilities and conduct comprehensive disarmament.

25. With respect to the administration of justice, witnesses and victims appeared most concerned that the compensation mechanisms in the Marial Bai Agreement and the Tri-State Peace Conference Resolutions had not been honoured.¹⁶⁴ The Commission observed

¹⁵⁰ ERN 102627 - 102631; and ERN 102609 - 102617, paras. 12-15.

¹⁵¹ ERN 102627 - 102631, paras. 5-6; ERN 102632 - 102652.

¹⁵² ERN 103249 - 103254; ERN 102627 - 102631, para. 9; ERN 102609 - 102617, paras. 12-15; and ERN D120820 - 120826.

¹⁵³ ERN 102689 - 102690, paras. 9-20; ERN 102594 - 102600, paras. 10-13; ERN 102699 - 102706, para. 13; ERN 102627 - 102631, para. 5; ERN 102664 - 102670, paras. 9-14; ERN 102618 - 102626, para. 10; ERN 102707 - 102717, paras. 9-10.

¹⁵⁴ ERN 103358 - 103367, para. 7; ERN 102872 - 102876, para. 13; Confidential meeting, 6 July 2019.

¹⁵⁵ ERN 103249 - 103254; ERN 102872 - 102876.

¹⁵⁶ ERN 103249 - 103254; ERN 102797 - 102802, paras. 8-11; ERN 102872 - 102876, paras. 14-15; ERN 102632 - 102652, para. 22; and Confidential meeting, 6 July 2019.

¹⁵⁷ ERN 102850 - 102857, paras. 11-12; ERN 102797 - 102802, paras. 8-9; ERN 102803 - 102810, paras. 13-14.

¹⁵⁸ Investigator's Report; Confidential meeting, 9 July 2019.

¹⁵⁹ ERN 102850 - 102857, para. 11-12.

¹⁶⁰ ERN D120820 - 120826.

¹⁶¹ See, e.g., ERN 102546 - 102552; ERN 102580 - 102596, para. 7-13; ERN 102587 - 102593; ERN 102563 - 102568.

¹⁶² ERN 102872 - 102876, para. 17; ERN 102632 - 102652, paras. 25-31; Confidential meeting, 9 July 2019.

¹⁶³ ERN 102632 - 102652, para. 32; ERN 102618 - 102626, para. 15-17.

¹⁶⁴ Confidential Meeting, 22 September 2019.

that Luo suspects in these incidents tended to be the ones pursued and arrested.¹⁶⁵ While there was a cross-border Special Court established in Wau, local communities still expressed a preference for informal compensation and reconciliation mechanisms, rather than criminal justice.¹⁶⁶

B. Mayom (Unity) and Twic (Warrap)

26. The Commission received credible information that between December 2018 and May 2019 the border area between Unity and Warrap states was marked by a high number of attacks and counter-attacks between Bul Nuer from Mayom (Unity) on one side, and Dinka from Tonj and Twic (Warrap) on the other.¹⁶⁷ The attacks resulted in hundreds of civilian casualties and thousands of cattle looted by both sides.¹⁶⁸

27. One of the deadliest attacks was launched by Dinka from Luocho and Low (Warrap) on a cattle camp in Load (Mayom County) in mid-January 2019,¹⁶⁹ which killed and injured hundreds of civilians¹⁷⁰ including dozens of women, children and infants.¹⁷¹ While some attackers wore civilian clothes, others were dressed in Tiger Battalion uniforms or SPLA uniforms including at least two persons with 3 stars, two persons with 2 stars and one person with one star on the shoulder boards.¹⁷² Civilian cattle raiders were supported by military [SSPDF forces]¹⁷³ and reportedly received their orders from a high-ranking Government official.¹⁷⁴ One victim stated to the Commission “My father and my three sisters were killed at 4.00 a.m. I was in the cattle camp in Load when it happened . . . A lot of people were killed, around 270 people, in Load . . . Among the 270 were women and small children, even babies. They took the cattle. They [the State Government of Tonj] were launching this attack because of tribal conflict between the Nuer and Dinka . . . I was also injured in the attack by bullet, it is still inside [my shoulder]. I asked the Governor of Northern Liech State for money for the treatment, but he does not give me money because I am with the opposition.”¹⁷⁵

28. Sources also believed that the heavy weapons were distributed by the Government of Tonj.¹⁷⁶ Attacks were carried out using light and heavy weapons including AK-47s (“Kalashnikovs”), PK machine guns (PKMs) and rocket-propelled grenades (RPGs).¹⁷⁷ Sources described how cattle keepers raided cattle while those in uniform fired weapons.¹⁷⁸

29. Beginning in April 2019 and onwards, a series of attacks and counterattacks between Dinka from Twic County (Warrap) and Bul Nuer from Mayom County (Unity) culminated in a final heavy attack on 28 May 2019 in which Bul Nuer from Mayom County attacked locations in the Turalei area (Warrap) resulting in the killing of 28 (22 Dinka from Turalei and four Bul Nuer from Mayom),¹⁷⁹ injuring of over 20,¹⁸⁰ the looting of thousands of cattle¹⁸¹ and burning down of shelters.¹⁸² Due to the magnitude of the incident, the

¹⁶⁵ Confidential Meeting, 1 August 2019.

¹⁶⁶ Confidential Meeting, 22 September 2019.

¹⁶⁷ ERN 103303 - 103309, para. 4; ERN 102974 - 102977, paras. 7-8; ERN 102978 - 102981, para. 5; ERN 102982 - 102985, paras. 8 and 10; Investigator’s Report.

¹⁶⁸ ERN 103303 - 103309, para. 4.

¹⁶⁹ This attack was reportedly carried out in retaliation of an attack by Bul Nuer from Mayom (Unity) on Dinka communities in Yathngek and Majak Lian (Warrap), and reportedly caused more than a hundred civilian deaths.

¹⁷⁰ ERN 103290 - 103297, para. 5; ERN 103290 - 103297, para. 9; ERN 103285 - 103289, para. 9.

¹⁷¹ ERN 103073 - 103076, para. 4.; ERN 103290 - 103297, para. 5; ERN 103285 - 103289, para. 8; ERN 102978 - 102981, para. 7; ERN 103264 - 103268, para.11.

¹⁷² ERN 103290 - 103297, para. 20.

¹⁷³ ERN 103285 - 103289, para. 6; ERN 102982 - 102985, para. 6; ERN 103264 - 103268, para.9.

¹⁷⁴ ERN 103290 - 103297 para. 17; ERN 103073 - 103076, para. 6.

¹⁷⁵ ERN 103290 - 103297, paras. 4-5, and 8-9.

¹⁷⁶ ERN 103290 - 103297, para. 7; ERN 103073 - 103076, para. 6.

¹⁷⁷ ERN 103073 - 103076, para. 6; ERN 103290 - 103297, paras. 7, 20 and 22; ERN 103285 - 103289, para. 5; ERN 102982 - 102985 (a), para. 6.

¹⁷⁸ ERN 103290 - 103297, para. 12; ERN 103285 - 103289, para. 17.

¹⁷⁹ ERN 103303 - 103309, para. 7; and Confidential meeting note.

¹⁸⁰ ERN 103303 - 103309, paras. 7 and 11.

¹⁸¹ ERN 103303 - 103309, para. 4.

Governor of Twic described the attack as a “military level operation.”¹⁸³ Following the wave of deadly attacks, the Governor of Northern Liech State convened a conference attended by the governors of Twic and Gogrial and 60 other civil and military authorities in Mankien (Unity) from 7 to 9 May 2019 to address the cross-border violence.¹⁸⁴

C. Jonglei

30. While deeply entrenched conflict between the Lou Nuer, Dinka and Murle pastoralist communities has historically played a defining role in the lives of civilians in Jonglei, this has been exacerbated by the national conflict. By the time the civil war spread to the region in December 2013, both the Government as well as the opposition capitalized on the ethnic divide and historical grievances, with several areas of the State changing hands over time.¹⁸⁵ Since cattle has always been central to the livelihoods of the Lou Nuer, Dinka and Murle pastoralists who occupy the region, as well as to their social and cultural systems, the spread of arms and increased militarization, commercialization of cattle and rising dowry price have incentivized cattle raiding and child abduction rendering it even more deadly in recent times.¹⁸⁶

31. In late November 2018, in the attempt to reconcile the divide between the Lou Nuer and Murle communities, a United Nations agency organized a peace delegation to travel to Lokomai in Liakangole to deliver food.¹⁸⁷ Witnesses told the Commission that after the food was offloaded from the boats and partially distributed in Lokomai, members of the Murle community launched an attack on the delegation, killing at least eight individuals.¹⁸⁸ Before fleeing the scene, the attackers reportedly stole food items such as sorghum, flour, oil and beans.¹⁸⁹ Relatives of the dead expressed concerns to the Commission regarding the killings as well as compensation for the loss of their loved ones.¹⁹⁰

32. Less than two months later, in January 2019, members of the Murle community attacked cattle keepers from the Lou Nuer community in Duchan and Kolabel villages (Jonglei), killing at least 47 individuals, injuring 78 others and stealing an estimated 1,000 heads of cattle.¹⁹¹ As one witness recounted, “At the time the Murle attacked us, I was walking in the front line . . . They rushed at us in one large group from the right side, as if they were coming from Akobo East. We were taken by complete surprise . . .”¹⁹² Though two of his family members were killed during the incident, the witness reported that no investigation had been opened.

33. In the absence of the rule of law and accountability, one woman told the Commission, “Given the insecurity in our area, we have started to send our children in the White Army to patrol the bush before we do anything . . . If the Murle loot our cattle, they quickly recover them. If they abduct our children, the White Army goes after them.” She added that women in the community support the White Army by rewarding them with food and water when they go to fight.¹⁹³ Following clashes between Lou Nuer sub-clans, the White Army replenished its *gojam* (select fighters from among its ranks) to maintain peace in Akobo Town in 2018.¹⁹⁴ The *gojam* wear uniforms and carry arms to protect civilians. Youth reported to the Commission that they obtain arms by recovering them during battle or bartering with SSPDF soldiers based in Waat for cattle. Indeed, the Commission

¹⁸² ERN 103303 - 103309, para. 7.

¹⁸³ ERN 103303 - 103309, para. 5.

¹⁸⁴ ERN 103303 - 103309, para. 4.

¹⁸⁵ Drivers of conflict in Jonglei State, Judith McCallum and Alfred Okech, Humanitarian Practice Network, May 2013, available at <https://odihpn.org/magazine/drivers-of-conflict-in-jonglei-state>.

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ ERN 102889 - 102893, para. 7.

¹⁸⁸ ERN 103234 - 103239, para. 12.

¹⁸⁹ ERN 103234 - 103239, para. 12.

¹⁹⁰ ERN 102889 - 102893.

¹⁹¹ ERN 103234 - 103239, para. 13; ERN 103371 - 103376, para. 11; ERN 102913 - 102917, para. 18; ERN 102918 - 102924, para. 18; ERN 103259 - 103263.

¹⁹² ERN 103259 - 103263, para. 7.

¹⁹³ ERN 103234 - 103239, para. 15.

¹⁹⁴ ERN 103353 - 103356; ERN 102913 - 102917, para. 18.

documented the widespread circulation of arms among the youth, including arms registered to the NSS Internal Security Bureau.

34. Witnesses expressed concerns that men were disproportionately targeted for killing during these incidents.¹⁹⁵ On the other hand, women, girls and boys were more likely to fall victim to abduction.

35. Towards the middle of the year, several measures were introduced to restore peace to the region. Speaking out against the resurgence in violence within their communities, women's associations condemned cattle raiding, kidnapping of children, road robberies and fighting between youth in Greater Jonglei on 7 May 2019.¹⁹⁶ In Spring 2019, the White Army planned a revenge attack in response to the November 2018 incident in Lokomai but after intervention from the Chairman of the SPLA-IO, Dr. Riek Machar, who reportedly encouraged them to allow the national peace process to address their concerns, they decided to abandon their mission and return home.¹⁹⁷ On 7 and 8 August 2019, the Inter-Communal Peace Dialogue among the Dinka, Lou Nuer and Murle of Jonglei introduced a Joint Peace Committee to report incidents of community-based violence.¹⁹⁸

36. Nevertheless, despite the peace conference, the Commission received information that attacks continued into late November 2019 when armed Murle elements reportedly killed at least one individual and looted cattle.¹⁹⁹ Several witnesses interviewed by the Commission, including children, indicated a high-ranking Government official organized members of the Murle community and provided them with arms.²⁰⁰ As one member of the Lou Nuer community told the Commission, "The issues between the Murle and the Lou Nuer . . . are not political in the sense that the Murle attack us and capture towns, but it is political in the sense that political actors are involved in influencing groups that raid cattle, abduct and kill our people. The Murle and Dinka Bor are with the Government and we are with the SPLA-IO."²⁰¹

III. Starvation

37. Millions of South Sudanese women, men and children continued to face acute food insecurity and do not know where their next meal will come from. During the reporting period, some 6.35 million individuals comprising 54 per cent of the population were classified as 'in Crisis' or worse 'acute food insecurity'.²⁰² The Greater Upper Nile region is currently the most food insecure, followed by the Bahr el Ghazal region.²⁰³ In 2019, the Human Development Index, which measures basic dimensions of human development, ranked South Sudan as the third worst nation state in which to reside, at 186 out of 189 countries.²⁰⁴

38. It is estimated that 1.3 million children will need treatment for acute malnutrition in 2020, 300,000 of whom will be severely acute malnourished. Despite a decrease in military

¹⁹⁵ ERN 102913 - 102917; ERN 102918 - 102924.

¹⁹⁶ Confidential documents on file.

¹⁹⁷ ERN 103399 - 103406, para. 19.

¹⁹⁸ ERN D120814 - D120815.

¹⁹⁹ ERN 103371 - 103376, para. 11; ERN 103377 - 103382, para 10; 102913 - 102917, para. 19.

²⁰⁰ ERN 103336 - 103340; ERN 103341 - 103344; ERN 103389 - 103394; ERN 103413 - 103419; ERN 103259 - 103263; ERN 103445 - 103448; and ERN 103383 - 103388.

²⁰¹ ERN 103377 - 103382, para. 8.

²⁰² South Sudan: IPC Acute Food Security Snapshot August 2019 – April 2020, FAO, available at <http://www.fao.org/in-action/kore/news-and-events/news-details/en/c/1208338>.

²⁰³ More than half the country struggles to survive despite improving conditions in South Sudan, FAO, 11 September 2019, available at <http://www.fao.org/south-sudan/news/detail-events/en/c/1207694>.

²⁰⁴ South Sudan Human Development Indicators, UNDP, 2019, available at <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SSD>.

confrontations, the proportion of children acutely malnourished grew from 13 per cent in 2018 to 16 per cent in 2019, above the emergency threshold of 15 percent.²⁰⁵

39. The effects of food insecurity were compounded during the period under review by abnormally heavy rains and high levels of seasonal flooding. On 29 October 2019, President Kiir declared a state of emergency covering 30 counties in Greater Bahr el Ghazal, Greater Upper Nile and Greater Equatoria. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) estimated that close to one million people were affected across the country. Some 72,600 metric tons of cereals were further lost due to flooding,²⁰⁶ amounting to approximately a 15 per cent loss in production. The situation remains worse for those internally displaced, including vulnerable children, elderly, widows, and disabled individuals.

40. While poverty and bifurcated weather seasons in the South Sudanese subsistence economy have substantially affected the availability of food countrywide, access to food and other vital objects indispensable to the survival of the population have been undermined by the actions of the government in control of strategic locations and where they have deliberately implemented strategies responsible for food insecurity. Armed groups holding territory for military advantage have behaved in a similar fashion.

41. Both government forces and armed groups have for example pursued policies responsible for the starvation of the population in Wau and Unity States (A/HRC/43/56/CRP.1). Such policies were envisaged and implemented as part of a wider strategy to deprive enemy communities of resources in order to force their capitulation, allow soldiers and militias to reward themselves, forcibly displace communities from ancestral lands that could then be expropriated or simply to compel individuals to join different factions engaged in the conflict. Denial of humanitarian access and displacement brought about by unlawful tactics have significantly exacerbated famine in different parts of the country, depriving hundreds of thousands of civilians of vital needs including access to food (A/HRC/43/56/CRP.1).

Violations and alleged crimes - findings

42. The Commission has reasonable grounds to believe that both government and opposition forces attacked, destroyed and rendered useless objects indispensable to the survival of the population and used starvation of civilians as means to achieve military objectives. Denying access to food was used as an instrument to target and punish non-aligning communities especially those deemed to support the enemy while rewarding supporters and maintaining community loyalties. Some victims described deliberate policies pursued in both government and opposition forces-controlled areas to destroy and loot primary means of livelihood such as fresh crops, livestock, and ready harvest on which civilians were dependent for their survival.

43. The Commission further has reasonable grounds to believe that the government of South Sudan did not fulfil its obligations under national and international law to progressively use all resources at its disposal to prioritize access to food and ensure freedom from hunger for its population in affected areas. It neither prevented, investigated nor punished perpetrators of these crimes. The Commission collected information which demonstrated, moreover, that disproportionate resources were deliberately diverted and spent in funding the armed conflict, and that corruption and embezzlement by senior government officials came at the expense of the starving population.

44. Specifically, these acts were contrary to Article 14 of the Additional Protocol II which prohibits the starvation of civilians as a method of warfare, Article 18 which guarantees access to humanitarian relief to civilians, and Article 8(2)(e)(ix) of the Rome Statute of the International Criminal Court which now includes as a war crime in non-international armed conflict intentionally using starvation of civilians as a method of

²⁰⁵ Humanitarian Needs Overview, OCHA, November 2019, at p. 3, available at https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ss_20191120_south_sudan_humanitarian_needs_overview_2020.pdf

²⁰⁶ Country Brief October 2019, WFP, available at https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110949/download/?_ga=2.48343718.1269336333.1575637372-1581897920.1575637372.

warfare.²⁰⁷ Although South Sudan is not party to the Rome Statute, the war crime could still be prosecuted through a Security Council referral or in states which already include a similar war crime of starvation in their national criminal law.

45. These acts were further contrary to Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights which guarantees a right to food as part of an adequate standard of living. While there is no express provision in the African Charter on Human and Peoples' Rights which guarantees the right to food, the African Commission on Human and Peoples' Rights has stated that the "Right to food is implicitly protected under the African Charter on Human and Peoples' Rights through the right to life, the right to health, and the right to economic, social and cultural development".²⁰⁸

46. At the national level, the right to food may be construed by Articles 9(3) and 11 of the Constitution which guarantee both the domestic application of international human rights instruments to which South Sudan is a state party and the right to life and human dignity. The interdependence, indivisibility and interrelated nature of all human rights form another basis of the recognition of the right to food.

47. Based on the information collected, the Commission concludes that incontrovertible and sufficient evidence exists to hold to account individuals both in government and on the armed opposition under international and national laws that have pursued policies leading to starvation of the population.

IV. Sexual and gender-based violence

48. Sexual and gender-based violence, including conflict related sexual violence²⁰⁹ continued to be widespread and pervasive in South Sudan, characterised by a recognizable pattern of terror and subjugation. During the period under review, violations documented by the Commission included rape and gang rape, sexual mutilation, forced marriage, abduction and sexualised torture.²¹⁰ Children including young girls were also victims of sexual exploitation.²¹¹

49. The current environment in South Sudan remains insecure and often deadly for South Sudanese women and girls as bodily integrity cannot be guaranteed. The DDR of various forces including members of armed groups exacerbated insecurity for women and girls, as the inadequate nature of cantonment and uncertainty over livelihoods for cantoned soldiers drove them to roam around civilian inhabited areas in search of food and water, rendering women and girls vulnerable to abuse.

50. Though conflict at the national level decreased following the signing of the R-ARCSS in September 2018, localized and intercommunal conflict(s) adversely impacted on women and girls, as well as men and boys. As conflict at the local level escalated significantly between December 2018 and November 2019 and generated heightened insecurity and violence, it further created an environment for criminal activity in which sexual and gender-based violations thrived.²¹²

²⁰⁷ Art 8(2)(e)xix: 'Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supplies'.

²⁰⁸ 155/96: Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, para. 65

²⁰⁹ "Conflict-related sexual violence refers to incidents or patterns (for the purposes of listing in accordance with Security Council resolution 1960 (2010)) of sexual violence, that is rape, sexual slavery, forced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization or any other form of sexual violence of comparable gravity against women, men or children. Such incidents or patterns occur in conflict or post-conflict settings or other situations of concern (e.g. political strife)." See 66/657-S/2012/33, para. 3. "Gender-based violence is considered to be any harmful act directed against individuals or groups of individuals on the basis of their gender. Gender-based violence may include sexual violence, domestic violence, trafficking, forced/early marriage and harmful traditional practices." See A/HRC/27/21, para. 3 (internal citation omitted).

²¹⁰ ERN 103469 - 103474; ERN 102632 - 102652.

²¹¹ ERN 102991 - 102995

²¹² ERN 102940 - 102943.

51. Incidents of sexual and gender-based violence arising from localized conflict included rape and gang rape, forced nudity, abduction, sexualised torture and forced marriage.²¹³ Evidence collected by the Commission confirmed that perpetrators of sexual violence in the context of localised conflict were mainly cattle keepers and young men, some of whom belonged to organized militias operating under the command and control of both government and opposition forces.²¹⁴ Local authorities have neither investigated nor prosecuted any cases reported.

On-going violations

52. Conflict related sexual violence has been so prevalent and widespread that survivors have normalised their experiences of rape. One witness told the Commission: “This war has drained me [...] I have been raped repeatedly. Sometimes we [women] stop talking about this, its normal. We go to get fire wood, we are raped, and we come back, what can we do? [...] The third occasion [when I was raped] was this year, 2019, in September [...]”²¹⁵

53. In a previously documented pattern, abductions targeting women on ethnic grounds continued during the reporting period. A witness described how two women she was traveling with while in search of firewood were abducted because of the ethnic community they belonged to. Both women were married with children and have not been seen since.²¹⁶

54. The Commission has documented the following non-exhaustive patterns of sexual and gender-based violations throughout the course of the conflict: (i) Sexual assault in conjunction with looting and intimidation of a target ethnic group; (ii) sexual assaults in conjunction with fighting in an area, usually including the rape of women in public before family members; (iii) sexual assault in detention centres of both women and men; (iv) assaults against women for the purpose of terrorizing and humiliating them usually as part of a targeted ethnic attack and a recognizable pattern of terror and subjugation; and (v) sexual enslavement of women.

Harms suffered and consequences

55. During the reporting period, survivors of sexual and gender-based violence experienced physical bodily trauma, forced and unwanted pregnancies, sexually transmitted infections, psychological trauma, post-traumatic stress disorders, stigma and ostracization owing to negative societal perceptions of being a “rape victim” and suspicion of having contracted HIV.²¹⁷ These consequences had adverse impact on the reproductive health of most survivors who described severe physical pain and bodily trauma experienced during rapes and immediately after. Many are living with long-term physical repercussions and severe psychological trauma resulting from the attacks. The Commission found that some survivors did not receive adequate medical attention or support following the violations they had endured.²¹⁸

56. The Commission also notes with concern the impact of sexual violence on South Sudanese men and boys which remained massively underreported as most male survivors were unwilling to speak about their experiences. Underreporting was attributed in part to limited awareness, societal stigma and shame.

57. Moreover, South Sudanese IDPs and refugees reported that multiple conflict-induced displacements over time have left them traumatised, depressed and despondent. The uncertainty experienced by those residing in protection of civilian sites also continued to have a negative impact on gender relations.²¹⁹ As with men and boys, notions of stigma and shame linked to sexual and gender-based violence remained a critical obstacle for

²¹³ ERN 102664 - 102670; ERN 102660 - 102663; ERN 102627 - 102631; ERN 102680 - 102688; ERN 102609 - 102617; ERN 102632 - 102652.

²¹⁴ ERN 102680 - 102688; ERN 102632 - 102652; ERN 102653 - 102659

²¹⁵ ERN 103475 - 103480.

²¹⁶ ERN 102587 - 102593.

²¹⁷ ERN 103469 - 103474.

²¹⁸ ERN 103495 - 103498.

²¹⁹ ERN 103499 - 103503.

many women and girls in their communities. For example, several spoke at length about the stigma linked to children born as a result of rape.²²⁰

Unity State 2018

58. In March 2019, the Commission reported that more than 125 women had allegedly been raped on the Nhialdu road²²¹ – in the Bentiu-Guit-Nhialdu triangle – over a 10-day period beginning in September and peaking in November 2018.²²² The Government of South Sudan disputed the allegations and dismissed with contempt media reports on the matter.²²³ The Government's internal investigation concluded that reported figures of 125 rapes over a 10-day period could not be verified.²²⁴ It did, however, confirm that 16 isolated cases of sexual violence occurred during this period. Local authorities confirmed between four and five cases reported every month of the period.²²⁵ A senior County official confirmed to the Commission that the government's investigation had neither been thorough nor comprehensive.

59. In response to the alarming number of cases of sexual violence in the Bentiu area, the UNMISS Human Rights Division conducted its own investigation in northern Unity, for the period September to December 2018, and documented 55 incidents affecting 175 victims of violence, including 134 cases of rape or gang rape and 41 other forms of gendered violations.²²⁶ The UNMISS report confirmed on-going patterns of sexual and gender-based violence in the region since the outbreak of the conflict in 2013-14,²²⁷ a trend that continued to date.

60. The Commission welcomes the Government's deployment of an investigation committee as a positive step but finds that the government's on-going denial and intimidation of witnesses has created a climate of fear preventing survivors from reporting, effectively hampering prospects for criminal accountability. Army commanders in the Bentiu area have been informed of these violations and are obligated to act to prevent and refer for prosecution where these violations are known.

Yambio (Western Equatoria) 2019

61. The Commission also gathered information on allegations of sexual slavery, forced marriage, forced labour and the rape of women and girls unlawfully detained in an SPLA (IO) military base in Yambio.²²⁸ On 28 July 2019, the SPLM/SPLA (IO) Chairman and Commander in Chief, Dr Riek Machar, issued unequivocal orders to "release without delay" women and girls held on SPLA (IO) bases in Western Equatoria (Sector 6).²²⁹ While the Commission commends the leadership of the SPLA (IO) for its rapid response, it remains gravely concerned that very few women have been released or allowed to leave.²³⁰

62. SPLM/SPLA (IO) leadership have publicly committed to ensure the release of the women as well as to prevent and address sexual violence within their ranks. However, they have also expressed difficulties in doing so given limited access to the women concerned,

²²⁰ See, e.g., ERN 103469 - 103474.

²²¹ A/HRC/40/CRP.1, paras. 456, 458.

²²² UNMISS & OHCHR *Conflict related sexual violence in Northern Unity, September – December 2018*, 15 February 2019, available at: <https://unmiss.unmissions.org/human-rights-reports>

²²³ No evidence to back claims of Bentiu rapes: investigation team, Radio Tamazuj, 21 December 2018, available at <https://radiotamazuj.org/en/news/article/no-evidence-to-back-claims-of-bentiu-rapes-investigation-team>; see also Republican Order No. 25/2018.

²²⁴ Confidential Report, CHRSS Files.

²²⁵ Confidential Report, CHRSS Files.

²²⁶ *Report of the Commission on Human Rights in South Sudan, 20 February 2019* (A/HRC/40/CRP/1)

²²⁷ See UNMISS & OHCHR *Indiscriminate attacks against civilians in Southern Unity, April – May 2018*

²²⁸ Confidential Meetings, CHRSS Files.

²²⁹ ERN D120827 - D120828.

²³⁰ About 40 to 50 women and girls have been able to leave the army base. However, it has also been reported that several of the women after having been joined to a soldier and now having borne children out of the relationships within the base overtime, face discrimination when they attempt to return to their communities. In these situations, some women have returned to the base where they are able to obtain food and some form of livelihood. Confidential meetings.

as well as reluctance by the commanders and other military personnel to allow the women to leave. The Commission continues to monitor this situation and notes efforts by relevant leadership to ensure it is addressed fully and to completion.²³¹

Responses by the State and other authorities

63. The Commission notes that the main obstacles to accountability for sexual and gender-based violence are the deliberate failure and lack of political will by the government of South Sudan to hold senior commanders and the security forces accountable. Even where evidence was available, the Government of South Sudan has repeatedly failed to take steps to decisively deal with these incidents in clear violation of their obligations under international and domestic law.²³² To date, there have been no reported prosecutions of incidents of sexual and gender-based violence, and instead the Government has deliberately sought to silence those who have courageously reported the violations they endured. The Government of South Sudan can no longer rest on its laurels for the successful prosecution of the perpetrators in the Terrain case (A/HRC/40/69, para. 43) and needs to act decisively to address the on-going impunity.

64. The government's only response to such violations has been to announce establishing specialized chambers. Beyond providing a building, these chambers are yet to be operationalized.²³³ The situation is rapidly deteriorating with a backlog of more than 200 cases, increasing daily.²³⁴ Four judges have been appointed to handle the cases, comprising one female and three males.²³⁵

Violations and alleged crimes - findings

65. The Republic of South Sudan has acceded to several international and regional human rights instruments that reaffirm the rights of women and girls to equality and dignity. It has acceded to the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,²³⁶ the United Nations Convention against Torture²³⁷ and the Convention on the Rights of the Child.²³⁸ It is also a party to the African Charter on Human and People's Rights and has signed but not ratified the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa (Maputo protocol).²³⁹ These instruments guarantee equal rights and dignity for both women and men, equality before the law and prohibit any form of discrimination on the basis of sex or gender.

66. Based on the foregoing, the Commission has reasonable grounds to believe that members of government engaged in acts that violated the right of women and girls to equality before the law and prohibition of any form of discrimination,²⁴⁰ guaranteed by the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women. They also violated the right of victims to freedom from torture.²⁴¹ Certain conduct further violated rights against early and forced marriage,²⁴² the right to life,²⁴³ dignity²⁴⁴ and prohibition of all forms against discrimination²⁴⁵ guaranteed by the Maputo Protocol of the African Charter on Human and Peoples Rights on the Rights of Women.

²³¹ ERN D120829 - D120829.

²³² Legal Action Worldwide (LAW): "First legal case lodged against South Sudanese Government for rape and sexual slavery" before the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), December 2018; ERN D116272.

²³³ Confidential Meeting.

²³⁴ Confidential Meeting.

²³⁵ Confidential Meeting.

²³⁶ Acceded to in 2015.

²³⁷ Ibid.

²³⁸ Ibid.

²³⁹ Signed in 2013.

²⁴⁰ CEDAW, Art. 2.

²⁴¹ UNCAT, Art. 2.

²⁴² Maputo Protocol, Art. 6.

²⁴³ Ibid., at Art. 4.

²⁴⁴ Ibid., at Art. 3.

²⁴⁵ Ibid., at Art. 2.

67. These acts were also contrary to the laws of South Sudan, most notably the right to equality before the law guaranteed by the Constitution of South Sudan protection from sexual abuse guaranteed by the Child Act 2008.²⁴⁶ They were further contrary to the Penal Code which prohibits rape and abduction of women for purposes of early marriage, or sexual abuse.²⁴⁷

68. The Commission finds that many Commanders have been responsible for deliberately inciting sexual and gender-based violations, by giving carte blanche to young recruits to abduct women and hold them as sexual slaves, by setting an example by their own conduct or by condoning such crimes and failing to take action to hold those responsible for such crimes accountable.

69. The Commission also finds that non-state actors including opposition forces are not exempt from responsibility for sexual and gender-based violence. Despite efforts to implement an action plan on preventing and addressing sexual violence in conflict, the Commission urges the military and civilian leadership of the opposition to robustly address sexual and gender-based violations perpetrated by those in their ranks.

70. Beyond prevailing impunity, so long as denial and stigma prevail the accountability for sexual and gender-based violations further remains a grave challenge. In its report of March 2019, the Commission found a direct nexus between the lack of gender equality in the country and the prevalence of sexual and gender-based violence (A/HRC/40/69, para. 42). Impunity for sexual and gender-based violence in South Sudan is therefore exacerbated by underlying gender inequality and the ethnic dimensions of the conflict at both the national and local levels.

V. Continued denial of fundamental freedoms

A. Freedom of expression, opinion and assembly, arbitrary arrest and detention

71. A hallmark of the conflict since 2016 has been increasing securitization and ethnicization of the State security apparatus. These institutions have continued to engender a heightened climate of fear among communities and civil society (A/HRC/40/CRP.1, para. 237). During the period under review, individuals continued to describe being deprived of their fundamental freedoms including freedom of opinion, expression and assembly which impacted on human rights defenders, the publication of newspapers, the work of journalists and freedom of the press more generally. Civilians increasingly raised concerns regarding witness protection as a prerequisite to interacting with the Commission. As one South Sudanese woman expressed, “Citizens are so afraid [of being watched] that they do not even buy newspapers”.²⁴⁸ For 2019, the World Press Freedom Index compiled by Reporters Without Borders ranked South Sudan 139 out of 180 countries.²⁴⁹

72. The Commission spoke to numerous individuals including civil society organizations who had experienced how civic space for freedom of expression and speech had been severely curtailed by the security apparatus, particularly the NSS, who continued to clamp down on the media, shut down radio stations and newspapers, and arrested, harassed and intimidated journalists and human rights defenders. Humanitarian organizations also expressed reservations about heightened surveillance. Members of civil society organizations in Juba, for example, expressed concerns over State monitoring of

²⁴⁶ § 26: “Every female child has a right to be protected from sexual abuse and exploitation and gender-based violence, including rape, incest, early and forced marriage, female circumcision and female genital mutilation”.

²⁴⁷ §§ 247 and 273.

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ Reporters Without Borders, <https://rsf.org/en/south-sudan>. This ranking is based on several criteria including pluralism, media independence, media environment and self-censorship, legislative framework, transparency and the quality of infrastructure supporting the production of news and information.

their private social media and digital communication accounts.²⁵⁰ Others, including in Juba and Wau, were unable to conduct workshops without the express consent of NSS, who interlocutors believed were infiltrating and attending their workshops.²⁵¹ One interlocutor explained how State Security may determine the size of a workshop and the subject of discussion.²⁵² The Commission also continued to document cases where NSS did not authorize workshops and meetings of civil society groups to be held, despite the civic nature of their purpose.²⁵³

73. The media has repeatedly faced intimidation, harassment, threats and censorship, primarily from the security forces. This climate of repression has been marked by the closure of radio stations and the suppression of publications that convey information deemed to be critical or unfavourable to Government.²⁵⁴ Coverage of certain topics considered by officials to be too sensitive for public consumption included security and military matters, federalism, corruption, the opposition and even the peace process. This pervasive trend of censorship and manipulation of information comes at a moment when it is crucial for the people of South Sudan to engage in free and open debate about their future.

74. Though the South Sudan Media Authority was established in 2014 as a government agency to protect journalists, including those working to expose violations of human rights, it has instead become a tool for oppression and has been instrumental in revoking accreditations and work permits of such individuals. The Commission notes with concern the silencing of foreign journalists by the State apparatus, including the Media Authority, during the reporting period. These actions appeared to be calculated to prevent media scrutiny as the then deadline for the establishment of R-TGoNU on 12 November 2019 approached.

75. In the weeks leading up to the deadline, at least two foreign journalists were declared *persona non grata* by the State. One Associated Press journalist had her press credentials revoked on 31 October 2019 and was expelled for six months with the State finding that she had “concocted misinformation intended to create panic and fear of the unknown.”²⁵⁵ Less than one week later, on 4 November, a French journalist on assignment with France24 was reportedly similarly deported.²⁵⁶

76. Members of civil society based in Juba further recalled how NSS agents had been arbitrarily arresting and detaining their staff, forcing on numerous instances individuals to exile themselves abroad.²⁵⁷ One civil society representative recalled how “staff are picked up and taken for questioning and ultimately detained at the Blue House.”²⁵⁸ Those who had returned to South Sudan were too afraid to continue to work publicly.²⁵⁹

77. On 26 March, the Media Authority suspended Al-Watan newspaper for alleged non-compliance with licensing requirements. On 17 July, its editor-in-chief was arrested at Juba airport by NSS agents who forced him off a flight and confiscated his passport.²⁶⁰ Another civilian was tortured by NSS Officers and repeatedly detained unlawfully in solitary confinement at the Blue House for several months in total.²⁶¹ On 4 August 2019, the former

²⁵⁰ Confidential meeting, 21 August 2019; ERN 102903 - 102908, para. 14.

²⁵¹ ERN 102996 - 103002, para. 5; ERN 102903 - 102908, para. 16.

²⁵² ERN 102903 - 102908, para. 16.

²⁵³ ERN 102996 - 103002, para. 5; Confidential meeting.

²⁵⁴ ERN 103529 - 103537; ERN 102903 - 102908; ERN D120812 - D120812; ERN D120785 - D120790.

²⁵⁵ Twitter, 31 October 2019, available at <https://bit.ly/30mSuUE>; ERN 102903 - 102908, para. 10; and ERN D120813 - D120813.

²⁵⁶ South Sudan expels another journalist, second in two weeks, Reporters Without Borders, 7 November 2019, available at <https://rsf.org/en/news/south-sudan-expels-another-journalist-second-two-weeks>.

²⁵⁷ Confidential meeting, 7 November 2019; Confidential meeting, 14 November 2019; Confidential meeting, 15 November 2019; and Confidential meeting, 16 November 2019.

²⁵⁸ Confidential meeting, 7 November 2019. The NSS headquarters in Juba is commonly known as the “Blue House.”

²⁵⁹ Confidential meeting.

²⁶⁰ ERN 102903 - 102908, para. 10.

²⁶¹ ERN 103538 - 103547, paras. 31 - 33.

manager of Yirol Community Radio was reportedly released following nearly three weeks in prison. He had been arrested at the airport on 10 July for allegedly making defamatory remarks against the governor of Eastern Lakes State on social media.²⁶²

78. On 2 January 2020, President Kiir pardoned via presidential decree dozens of prisoners, including high profile political detainees. Peter Biar Ajak, a political activist who was detained by the NSS at Juba International Airport on 28 July 2018, and prominent businessman Kerbino Wol Agok were among the group released.²⁶³

Violations and alleged crimes - findings

79. The responsibility of the Government to promote and protect democratic space and foster an inclusive political environment, including through freedom of expression, peaceful assembly and association is a hallmark of the State's duty to uphold justice and rule of law. These violations do not occur because South Sudan lacks a sound legal system or the absence of national and international legal frameworks to prevent and punish them, but rather should be attributed to the on-going and entrenched impunity across state institutions and leadership, which allow those in positions of authority to act in flagrant disregard for the law in the belief that they will not be held accountable for their acts.

80. The Commission has collected evidence which indicates that members of the State Security forces were involved in the unlawful journalists and editors,²⁶⁴ harassed and detained members of civil society considered critical of the government, infiltrated civic organizations,²⁶⁵ suspended newspapers deemed critical of the state and revoked journalists' accreditations whom they accused of breaching national security. Collectively, these acts were contrary to national and international human rights obligations to protect the fundamental rights and freedoms of those within its jurisdiction. The Commission has documented that these actions of the government through its security organs and Media Authority were unlawful. Any derogation, suspension or suppression of freedom of expression must be proportionate, non-discriminatory and limited to address the emergency or situation. Restrictions and suppression during the period under review were not warranted as there was no such emergency nor situation warranting the same.

81. The acts pursued violated the right to information and expression,²⁶⁶ freedom of association²⁶⁷ and freedom of assembly²⁶⁸ under the African Charter on Human and Peoples' Rights. The acts were also contrary to Article 24 of the Transitional Constitution of South Sudan (2011) which guarantees the right to freedom of expression, reception and dissemination of information and the Media Authority Act (2013) which enshrines principles of freedom of the press including reiterating the fundamental nature of Article 24 of the Transitional Constitution. Based on the Commission's findings, there is sufficient evidence to hold to account both individuals and entities involved for the violations of above-mentioned fundamental rights and freedoms.

B. Enforced disappearance, abduction and torture

82. Civilians in Western Bahr el Ghazal, Unity and Central Equatoria observed persistent fighting, with upsurges in April, June and August 2019 marked by an increase in scale and severity of violations, in particular abduction and enforced disappearances. Witnesses indicated that disappearances were characterized by prior inter-ethnic conflict and the presence of armed groups in these regions.

²⁶² Eastern Lakes authorities release detained journalist, Radio Tamazuj, 4 August 2019, available at <https://radiotamazuj.org/en/news/article/eastern-lakes-authorities-release-detained-journalist>.

²⁶³ ERN D120816 - D120819. In October 2018, the Pan African Lawyers Union (PALU) had instituted a case against the government of South Sudan at the East African Court of Justice challenging the arbitrary arrest, unlawful detention and torture of Kerbino Wol. The case is still on-going. See EACJ, case no. 18/2018.

²⁶⁴ ERN 102903 - 102908, para. 10

²⁶⁵ Ibid.

²⁶⁶ Art. 9.

²⁶⁷ Art. 10

²⁶⁸ Art. 11

83. The Commission continued to gather evidence in the case of human rights lawyer Dong Samuel Luak and opposition politician Aggrey Idri who disappeared from the streets of Nairobi, Kenya in January 2017. By multiple accounts, the two men were reportedly transferred unlawfully to South Sudan with the involvement of the South Sudanese security services. On 9 April 2019, the United Nations Panel of Experts reported the men were killed in the NSS detention and training facility in Luri, part of a presidential and security service complex approximately 20 kilometres west of Juba.

Violations and alleged crimes - findings

84. The Commission has encountered families of victims who have disappeared while in the custody of the government or after having been abducted by armed opposition.²⁶⁹ Unfortunately, in all cases identified, and despite the repeated inquiries by family members and relatives, neither the fate nor whereabouts of these individuals has been determined, as the government as well as opposition groups have refused to acknowledge the arrest and detention of such individuals.

85. South Sudanese authorities have repeatedly denied disappeared persons the right to recognition as a person before the law, depriving them and their families of the capacity to exercise rights and to access remedies for rights violations.

86. Through acts of enforced disappearance, South Sudanese authorities further violated other fundamental rights the rights to a fair trial and judicial guarantees. South Sudan has failed in its duty to investigate in good faith all allegations of human rights violations, in particular where the authorities alone had the relevant information, as is often the case if persons subjected to enforced disappearance.

VI. Accountability and transitional justice

A. Accountability

87. Entrenched impunity and a lack of accountability for gross human rights violations and abuses, serious violations of international humanitarian law and international crimes continues to characterize the human rights situation in South Sudan. The persistent failure to address violations and abuses of the past, on-going denial and a profound lack of political will to hold individuals and groups accountable, has been the key driver of violence. The Commission's findings confirm that impunity remains deeply entrenched and that victims continued to be denied their right to an effective remedy and reparations.

88. The Commission finds that there have been no effective criminal investigations into the numerous violations documented in its previous reports and by other organizations. Undoubtedly, the lack of political will at the highest level of government to hold perpetrators accountable, and persistent interference by the government in judicial matters are the chief obstacles to accountability. Moreover, existing investigative bodies often lack independence and transparency. Flawed procedures mean that prosecutors often decline to initiate investigations and prosecutions in the absence of formal complaints by victims, who fear stigma, reprisals and victimization. Known individuals, having committed grave violations, have instead been reappointed to higher political office without any form of accountability; one such individual had been identified in a UN report as bearing the greatest responsibility for grave violations, possibly amounting to war crimes, in southern Unity between April and May 2018.

B. Transitional justice

89. Transitional justice in the context of South Sudan is critical and indispensable to achieving sustainable peace, national reconciliation and healing, and rebuilding the rule of law. Decades of violent conflict characterised by unspeakable violations combined with

²⁶⁹ Since only States can become party to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the Commission uses the term "abduction" to denote similar acts carried out by members of armed groups.

weak rule of law institutions have resulted in diminished security, lawlessness and a population sharply divided along ethnic lines. Immense political and social investment is therefore required to rebuild such a society and to achieve a durable peace where the rule of law is re-established, gross human rights violations and abuses are addressed and measures of reconciliation and healing are prioritised.

90. Chapter V of the ARCSS, as reconfirmed by the R-ARCSS, lays down a holistic programme for achieving these goals. Their implementation will assist South Sudan to come to terms with the legacy of its past. However, the establishment of the three Chapter V transitional justice mechanisms has stalled in the face of a lack of political will on the part of the government, and the absence of decisive action by the African Union and regional actors. Delays in the formation of the R-TGoNU have been used as justification for holding up the establishment of the Hybrid Court, denying justice to South Sudanese victims.

C. The Hybrid Court for South Sudan

91. The establishment of the Hybrid Court has been marked by delay and obstruction by the Government. The AU's 2017 negotiations with the Government to establish the court ended in a stalemate, leaving the memorandum of understanding between the AU and the Government unsigned. Domestic legislation to operationalize the court was never adopted. Since the signing of the R-ARCSS, the government has contended that the Court must be formed by the R-TGoNU; but if the R-TGoNU continues to be delayed, the Commission takes the view that the AU Commission (AUC) and the incumbent TGoNU must establish the Court. Since both the ARCSS and R-ARCSS were designed to deliver transitional justice, the provisions on power-sharing should not be used to delay the activation of the justice or reconciliation mechanisms. If the incumbent TGoNU fails to cooperate, the AUC should consider establishing the Court as the Commission takes the view it has the legal authority to do so. The AUC could begin preparations, including by establishing an investigative mechanism to complement the collection and preservation of evidence, pending the full operationalization of the court.

D. Commission for Truth, Reconciliation and Healing (CTRH)

92. While the government has pledged publicly to support the establishment of the CTRH, it has not committed the required resources. A technical committee created in 2017 to support sensitization activities and raise awareness about the CTRH conducted limited consultations across the country with minimal impact, leaving questions about the timing, relevance and credibility of the process. In order to achieve the goals of the process, all South Sudanese should be able to participate freely in the agreed processes for establishing the truth, understanding the causes of conflict and promoting reconciliation and healing. This requires a climate of freedom rather than the current environment of suppression of dissent and freedom of expression and assembly. While the country is still at war, and significant numbers of citizens remain displaced and exiled, an open and genuine reconciliation, healing and reconciliation processes would be difficult to achieve. It is imperative that the parties resolve outstanding differences preventing the total end of the conflict and the formation of the R-TGoNU.

E. Compensation and Reparation Authority (CRA)

93. As with the other two Chapter V mechanisms, the Government has failed to establish the CRA and a Reparation Fund even though the ARCSS stipulated six months for the enactment of the necessary legislation. These are central pillars of transitional justice, but no effort has been made to conduct any consultations whatsoever on the CRA. While the Commission is aware that the Government has had concerns about the monetary cost of reparations it calls upon the Government to set aside at least 1 per cent of oil revenues for reparations, and in addition, can also invest in other non-monetary reparations.

F. National Dialogue

94. While the National Dialogue process continues to gather and analyse information from within and outside the country in preparation for a national conference scheduled for March 2020, concerns about its lack of inclusivity and whether it is a vehicle to replace the Hybrid Court have remained. The Commission continues to hold the view that while the findings of the National Dialogue should be preserved and acted upon, care should be taken to that it does not duplicate, or contradict, the work of the Chapter V mechanisms.

Annex III

Applicable law

1. The Commission conducted its work within the frameworks of international human rights law, international humanitarian law, international criminal law and the domestic law of South Sudan. The Commission's Report of 2018 set out in detail the law applicable to South Sudan (A/HRC/37/CRP.2, paras. 98-163).
2. South Sudan is party to range of international and regional human rights instruments which reaffirm its obligations to protect fundamental rights and freedoms. It has ratified the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and its Optional Protocol; the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol; and the Convention on the Rights of the Child and two of the Optional Protocols – on the involvement of children in armed conflict and on the sale of children, child prostitution and child pornography. South Sudan has also acceded to the United Nations Convention against Corruption and is party to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol. While the South Sudan Transitional National Legislative Assembly ratified in July 2019 the International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and their First Optional Protocols respectively, the Government has not yet transmitted the instruments of accession to the United Nations, and, therefore, South Sudan is not yet a party to these four treaties. The Commission encourages the Government of South Sudan to send the necessary instruments of accession without delay.
3. South Sudan is also a party to the African Charter on Human and Peoples' Rights and its Protocol on the Rights of Women in Africa, the Organization of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, as well as to the African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention). The Government of South Sudan has signed but not ratified the African Charter on the Rights and Welfare of the Child and the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption.
4. A non-international armed conflict began in South Sudan on 15 December 2013. Consequently, parties to the conflict, and new conflicts that have arisen since then, are bound by Article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and their Additional Protocols II and III (South Sudan is a party to all four Geneva Conventions and all three Additional Protocols) and by relevant customary international humanitarian law. Despite the signing of a permanent ceasefire (2017) and subsequent peace agreement (2018), the Commission assesses that hostilities have persisted to the extent that both international humanitarian law and international human rights law continued to apply throughout the reporting period.

A. Recruitment and the use of children in armed conflict

5. The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict sets 18 years as the minimum age for direct participation in hostilities, and for recruitment into armed groups. The recruitment and use of children in conflict is also contrary to section 22(2) of the SPLA Act (2009) and Article 31 of the Child Act (2008).²⁷⁰
6. The present report applies the definition of "children" in accordance with the Convention on the Rights of the Child (hereafter, "the CRC") to which the Republic of

²⁷⁰ During her visit to Addis Ababa on 10 May 2014, the Special Representative for Children and Armed Conflict had signed a commitment agreement with Riek Machar to end grave violations against and provide assistance to children, and to appoint a high-level focal point, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in South Sudan, S/2014/884, 11 December 2014, at p. 15.

South Sudan is a party. Pursuant to Article 1 of the CRC, a “child” is defined as every person younger than 18 years, unless, according to the law applicable to the child, a child becomes an adult earlier. In accordance with international standards, the 2008 Child Act of South Sudan also defines children as individuals under the age of 18. The Act further upholds the rights of children to non-discrimination, to life, survival and development, to education, well-being and health and to liberty and security of person. It sets the minimum age for conscription or voluntary recruitment into armed forces or groups at 18 years and prohibits the use of children in military or paramilitary activities.²⁷¹

7. South Sudan made two declarations to the Optional Protocol. On Article 3, it stated that “the minimum age at which it permits recruitment of volunteers in Armed Forces is eighteen years and in accordance with section 22 of the Sudan Peoples’ Liberation Army Act, 2009”. It further stated “that the safeguards provided in Article 3(2) of the Optional Protocol on Involvement of Children in the Armed Conflicts and in the Sudan Peoples’ Liberation Army Act, 2009 shall be observed and bound by to ensure that all recruitment is made in public places and not done under force or duress, advertised in the press and national media for young people, the recruits undergo medical examination and the record consist of recruitment as appropriate, among others, a birth certificate, certificate of education or apprenticeship”.

B. Localized conflict(s)

8. As part of their obligation to protect human rights, States must prevent, investigate, punish and ensure redress for human rights violations committed by both those within their ranks and non-state actors. South Sudan is a party to the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, which demand that parties to a conflict respect the rules on the conduct of hostilities (especially the rules on precaution, distinction and proportionality) as well as rules for the protection of the victims of armed conflict. The treaties have been incorporated in the law of South Sudan.²⁷²

9. South Sudan is also party to international human rights instruments such as the African Charter on Human and Peoples’ Rights, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and, again, the Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict. These treaties require respect for human rights including right to life, freedom from torture, freedom from inhuman and degrading treatment, right to fair trial and presumption of innocence and non-recruitment of children.

10. Under international law, including human rights law, the State may be held generally responsible for the wrongful conduct of non-State individuals or groups when the latter are acting in “complete dependence” on the State.²⁷³ A State might also be held responsible in cases in which non-State individuals or groups act on its instructions or under its direction or its “effective control”²⁷⁴ and also when its own agents acknowledge and adopt the conduct of non-State groups.²⁷⁵ States must investigate the use of lethal force

²⁷¹ Child Act (2008), §§ 9, 12, 14, 15, 19, 31 and 36. See also SPLA Act (2009), § 22(2).

²⁷² Geneva Convention Act, 2012.

²⁷³ International Court of Justice (ICJ), *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment, 2007 paragraphs 392, 399.

²⁷⁴ International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, Article 8, See also ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, 1986 paragraphs 109-110; and *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment, 2007 paragraphs 400, 401.

²⁷⁵ International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, Article 11. In its General Comment No. 3 on the African Charter on Human and Peoples’ Rights: The Right to Life (Article 4), the African Commission on Human and Peoples’ Rights expressed the view that a State could be held responsible for killings by non-State actors if it approved, supported or acquiesced in those acts. See also the Report on the Commission of Inquiry on Burundi, September 2017 (A/HRC/36/54), paragraphs 23-27.

by their agents, particularly those involved in law enforcement.²⁷⁶ For State investigations to be effective, they must be as prompt as possible, exhaustive, impartial, independent and open to public scrutiny.²⁷⁷ The African Commission on Human and Peoples' Rights has explained that a "state can be held responsible for killings by non-state actors if it approves, supports or acquiesces in those acts or if it fails to exercise due diligence to prevent such killings or to ensure proper investigation and accountability".²⁷⁸

11. The government of South Sudan bears the primary duty to protect and safeguard the well-being of its citizens through obligations it has voluntarily assumed under both domestic and international law. Non-state actors ("armed groups") may not be parties to such international human rights treaties, though are nevertheless obligated to respect the fundamental human rights of persons when such actors exercise de facto control over territory or persons, and such groups have additional obligations under international humanitarian law in times of armed conflict.²⁷⁹

C. Starvation

12. Protection of the population from starvation is a well-established norm under both treaty and customary international law binding on all belligerents, including non-state actors. Customary and treaty law prohibit impeding or the diversion of humanitarian assistance. South Sudan is a state party to the four Geneva Conventions of 1949 and the three Additional Protocols of 1977 and 2005.²⁸⁰ Of particular relevance to the non-international armed conflict in South Sudan are Common Article 3 to the Geneva Conventions and Articles 14 and 18 of Additional Protocol II to the Geneva Conventions, which prohibit the starvation of civilians or rendering useless objects indispensable for their survival and diversion of humanitarian assistance. Once the threshold for the application of Common Article 3 to the 1949 Geneva Conventions has been reached, the provisions which operate to protect the victims of war continue to apply even when there may appear to be periods of calm.²⁸¹

13. All parties to the conflict in South Sudan are bound by the relevant rules of customary international law applicable in non-international armed conflict.²⁸² These include requirements that parties to such conflicts must at all times abide by the principles of distinction, proportionality and precaution in attack.²⁸³ Belligerents have an obligation to ensure that civilians are humanely treated and to hold criminally accountable those individuals and entities who may be responsible for violations of this obligation.

14. The Republic of South Sudan is bound by Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights which guarantees the right to food as part of an adequate standard of living. As a state party is also bound by the provisions of the African Charter on Human and Peoples' Rights. While there is no express provision in the African Charter on Human and Peoples' Rights which guarantees the right to food, the African Commission on Human and

²⁷⁶ See the United Nations Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions, adopted on 24 May 1989 by the Economic and Social Council Resolution 1989/65, paragraphs 9, 10, 17.

²⁷⁷ See, for example, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 2005.

²⁷⁸ Paragraph 9 of General Comment No. 3 on the African Charter on Human and Peoples' Rights: The Right to Life (Article 4), adopted during the 57th Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples' Rights held from 4 to 18 November 2015 in Banjul, The Gambia.

²⁷⁹ See for a full discussion the Commission's 2018 Report A/HRC/37/CRP.2, paras. 99-137.

²⁸⁰ South Sudan ratified the Four Geneva Conventions and their Additional Protocols on 25 January 2013; they entered into force for South Sudan on 25 July 2013.

²⁸¹ The ICRC 2016 *Commentary on the First Geneva Convention* (Cambridge, Cambridge University Press, 2016) on the criteria of intensity and organization required for Article 3 to be applicable, see p. 141, para. 387; pp. 174-175, paras. 414-444, 484. See also Gabriella Venturini, "The Temporal Scope of the Conventions", in A. Clapham, P. Gaeta, and M. Sassöli, (eds), *The 1949 Geneva Conventions: A Commentary*, (Oxford, Oxford University Press, 2015) 51-66, at 61.

²⁸² ICRC, *Study on Customary International Humanitarian Law*, Rules 1-24.

²⁸³ Ibid.

Peoples' Rights has stated that the "Right to food is implicitly protected under the African Charter on Human and Peoples' Rights through the right to life, the right to health, and the right to economic, social and cultural development". In one of its decisions on Sudan, the Commission concluded that: "even if Sudan is going through a civil war, civilians in areas of strife are especially vulnerable and the state must take all possible measures to ensure that they are treated in accordance with international humanitarian law".²⁸⁴ Further, in its earlier decision on Chad, the Commission had also noted that "the African Charter, unlike other human rights instruments, does not allow for state parties to derogate from their treaty obligations during emergency situations. Thus, even a civil war in Chad cannot be used as an excuse by the state violating or permitting violations of rights in the African Charter".²⁸⁵

15. At the national level, the right to food may be construed by Articles 9(3) and 11 of the Constitution which guarantee both the domestic application of international human rights instruments to which South Sudan is a state party and the right to life and human dignity, respectively. The interdependence, indivisibility and interrelated nature of all human rights form another basis of the recognition of the right to food. It can therefore be inferred that both the state of South Sudan and armed opposition groups are bound to respect and fulfil their human rights and humanitarian law obligations under national, regional and international instruments and especially those that guarantee access to food, prohibit starvation of civilians and denial of access to humanitarian assistance in armed conflict.

D. Sexual and gender-based violence

16. Incidents of sexual and gender-based violence and conflict-related sexual violence with respect to South Sudanese women and girls have rarely been investigated and prosecuted with women and girls being left without extremely limited redress, not being able to bring perpetrators to justice and unable to obtain reparation for harm suffered. Access to justice for victims of rape and other forms of sexual violence remains a challenge as rape cases rarely find their way before the statutory courts and are usually brought before customary courts which have an inherent gender bias and seldom hold male perpetrators sufficiently accountable for crimes committed.²⁸⁶ In general, there is a trust deficit among women towards government institutions including the police, the statutory and the customary law courts, which are considered prejudiced against females.²⁸⁷ Sentences meted out in these institutions including but not limited to compensation in the currency of cattle or monetary compensation are in most cases unsatisfactory and disproportionate to the crimes committed. While perpetrators may be fined for these serious crimes, in some instances victims are compelled by both families to marry the perpetrator, increasing trauma and suffering of the victims.²⁸⁸

17. Despite this lack of serious commitment by the government of South Sudan and armed opposition groups to prevent, investigate and punish sexual and gender-based crimes, the Republic of South Sudan and armed opposition groups are both under national and international obligations to prevent and punish such crimes. Article 3 to the Geneva Conventions, while it does not explicitly mention specific forms of sexual violence, prohibits "violence to life and person" including cruel treatment and torture and "outrages upon personal dignity".²⁸⁹

18. South Sudan has also acceded to several international and regional human rights instruments that reaffirm the rights of women and girls to equality and dignity both in times

²⁸⁴ Amnesty International & Others v Sudan (2000) AHRLR 297 (ACHPR 1999). Para 50.

²⁸⁵ Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés v Chad (2000) AHRLR 66 (ACHPR 1995) para 21.

²⁸⁶ Justice Africa, "Justice in Practice: South Sudan", Spring 2015.

²⁸⁷ What Works to Prevent Violence against Women and Girls consortium, "No safe Place: A lifetime of violence for conflict-affected women and girls in South Sudan", 2017; Justice Africa, "Justice in Practice: South Sudan", Spring 2015.

²⁸⁸ What Works to Prevent Violence against Women and Girls consortium, "No safe Place: A lifetime of violence for conflict-affected women and girls in South Sudan", 2017.

²⁸⁹ See also Rule 93 of Rape and other forms of sexual violence

of war and peace. It has acceded to the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,²⁹⁰ the United Nations Convention against Torture²⁹¹ and the Convention on the Rights of the Child.²⁹² It is also a party to the African Charter on Human and Peoples' Rights and has signed but not ratified the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa (Maputo protocol).²⁹³ These instruments guarantee equal rights and dignity for both women and men, equality before the law, dignity, prohibition against early and forced marriage and any form of harmful practice and discrimination on the basis of sex or gender. At the domestic level, the laws of South Sudan, including most notably the Transitional Constitution (2011) guarantee the right to equality before the law for all persons. Further, the Child Act (2008) guarantees protection from sexual abuse and exploitation.²⁹⁴ The Penal Code of South Sudan prohibits rape and abduction of women for the purpose of early marriage or sexual abuse, respectively.²⁹⁵

19. In its General Recommendation 35, the CEDAW Committee concluded that “women’s right to a life free from gender-based violence is indivisible from and interdependent on other human rights, including the rights to life, health, liberty and security of the person, equality and equal protection within the family, freedom from torture, cruel, inhumane or degrading treatment, and freedom of expression, movement, participation, assembly and association.”²⁹⁶ The Committee further noted that “States parties are responsible for preventing such acts or omissions by their own organs and agents, including through . . . investigating, prosecuting and applying appropriate legal or disciplinary sanctions, as well as providing reparation, in all cases of gender-based violence against women, including those constituting international crimes, and in cases of failure, negligence or omission on the part of public authorities.”²⁹⁷ Based on the preceding, the government of South Sudan and armed opposition groups both have an inherent obligation to prevent, investigate and punish sexual and gender related crimes that may be committed by individuals and entities affiliated with either party to the conflict.

E. Freedom of expression, opinion and assembly, arbitrary arrest and detention

20. The responsibility of the government to promote and protect democratic space and foster an inclusive political environment, including through freedom of expression, peaceful assembly and association is a hallmark of the State’s duty to uphold justice and the rule of law. These violations do not occur because South Sudan lacks a sound legal system or the absence of national and international legal frameworks to prevent and punish them, but rather should be attributed to the on-going and entrenched impunity across state institutions and leadership, which allow those in positions of authority to act in flagrant disregard for the law in the belief that they will not be held accountable for their acts.

21. South Sudan is a party to wide range of regional and international instruments which reaffirm the right to freedom of expression, opinion and assembly. It is a party to the Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol which guarantee, among others, the fundamental rights and freedoms for both men and women including freedom of expression, assembly and opinion. While South Sudan has not yet finalized accession to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which protects freedom of expression in Article 19, the Convention has been

²⁹⁰ Acceded to in 2015.

²⁹¹ Acceded to in 2015.

²⁹² Acceded to in 2015.

²⁹³ Signed in 2013.

²⁹⁴ Section 26, Child Act 2008: “Every female child has a right to be protected from sexual abuse and exploitation and gender-based violence, including rape, incest, early and forced marriage, female circumcision and female genital mutilation”.

²⁹⁵ Sections 247 and 273, respectively.

²⁹⁶ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19.

²⁹⁷ Ibid, para 23.

ratified by the TNLA and it is awaiting depositing with the Secretary General. Further, South Sudan has ratified the African Charter on Human and Peoples' Rights which recognizes under Article 9 the right to receive information and to express and disseminate opinions within the law. In one of its decisions, the Commission has concluded that "arbitrarily arresting and detaining journalists, seizing magazine publications because they are critical of the government, closing media houses, and establishing prohibitive registration requirements amount to violations under the African Charter."²⁹⁸

22. Within domestic law, the Transitional Constitution (2011) enshrines in Article 24 the right to freedom of expression, reception and dissemination of information, publication, and access to the press without prejudice to public order, safety or morals as prescribed by law. The Media Authority Act (2013) also enshrines principles of freedom of the press including reiterating Article 24 of the Transitional Constitution and stating that the law will promote freedom of expression, a diverse range of media services which serve South Sudan's national languages, ethnic beliefs and cultures of the communities, and enhance the right of the public to know through promoting pluralism and a wide variety of publications and programming. It further provides that free media representing all groups and divisions of society shall be protected as essential to democracy, giving independent scrutiny of Government, and will be protected from censorship and against journalists having to reveal their source.²⁹⁹

23. Based on the above, the government of South Sudan has an inherent obligation to protect and fulfil its obligations enshrined in both national laws and international human rights instruments which guarantee the rights to freedom of expression, opinion and assembly that it has voluntarily assumed. The government has a responsibility to ensure that citizens and journalists can access and disseminate information without fear or intimidation from individuals and state-controlled entities such as the National Security Services or Media Authority. It is incumbent on the government of South Sudan to ensure that individuals and entities that violate these rights and freedoms enshrined in the law are held accountable within the established institutional and legal framework.

F. Enforced disappearance, abduction and torture

24. Enforced disappearance violates one's right to recognition as a person before the law and to liberty and security and freedom from arbitrary detention, including the right to be brought promptly before a judge or other official for review of the lawfulness of detention. Enforced disappearance may also be associated with torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment and extrajudicial execution, in violation of the right to life, prohibition on torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment, and may further lead to violations of the right to life.

25. Customary international humanitarian law further prohibits arbitrary deprivation of liberty,³⁰⁰ and requires parties to a conflict to keep a register of those deprived of their liberty,³⁰¹ to respect detainees' family life, to permit detainees to receive visitors, and to allow correspondence between detainees and their families.

26. Parties to a conflict must also take all feasible measures to account for persons reported missing as a result of the conflict and make efforts to provide family members with any information it has on their fate. Fundamental to the finding of a crime of enforced disappearance is a refusal to acknowledge the arrest, detention or abduction, or to give information on the fate or whereabouts of such person or persons.³⁰² The Committee on

²⁹⁸ African Commission on Human and Peoples' Rights, *Media Rights Agenda et al. v. Nigeria*, Communications 105/93-128/94-130/94-152/96, 31 October 1998.

²⁹⁹ See also "Response to NRA complaint against Eye Radio" Letter from the Managing Director of the Media Authority, December 17, 2019. On file with the Commission. The letter reiterates the fact that journalists are not required to disclose the sources of information obtained upon promise of confidentiality.

³⁰⁰ ICRC Rule 99.

³⁰¹ *Ibid.*, at Rule 123.

³⁰² *Elements of Crimes*, International Criminal Court (ICC), 2011, at Article 7(1)(i).

Enforced Disappearance has concluded that enforced disappearance can constitute acts of torture within the meaning of Article 1 of the UN Convention against Torture.³⁰³

27. Article 9(2) of the Convention on Enforced Disappearance provides for command responsibility for those with direct or indirect oversight over their subordinates who fail to prevent and punish the crime of enforced disappearance. Article 6 creates an obligation for states parties to establish competence to exercise jurisdiction over enforced disappearance when an alleged perpetrator is on its territory. Suspected perpetrators of enforced disappearance in South Sudan can face accountability for this crime in states exercising jurisdiction over this crime when committed abroad.

28. With regard to torture, as recently noted by the UK Supreme Court, “A person acting in an official capacity” includes “a person who acts or purports to act, otherwise than in a private and individual capacity, for or on behalf of an organisation or body which exercises, in the territory controlled by that organisation or body and in which the relevant conduct occurs, functions normally exercised by governments over their civilian populations. Furthermore, it covers any such person whether acting in peace time or in a situation of armed conflict.”³⁰⁴ Individuals from multiple armed groups in South Sudan may be considered to have acted or are acting in an ‘official capacity’ and thus their acts are potentially prosecutable as torture in the many jurisdictions around the world that exercise jurisdiction over extraterritorial torture.

³⁰³ See Committee on Enforced Disappearances (CED), Communication No. 456/2011, *Hernández v. Bolivia*, Views adopted on 15 May 2015, para 6.6.

³⁰⁴ *R v TRA (Appellant)* [2019] UKSC 51, at para. 76.

Annex IV

Armed State actors (command structures)

The Armed Forces in South Sudan

The Armed Forces of South Sudan was established pursuant to the SPLA Act of 2009 and organized, equipped and manned through issuance of Presidential Decrees issues by the President of Sudan. On 2 October 2018, President Kiir issued Republican Order No. 18/2018 changing the name of the South Sudan People's Liberation Army (SPLA) to the South Sudan People's Defense Forces (SSPDF).

The Act provided that the SPLA shall be organized with active and reserve forces. The active forces shall consist of the following:

- (a) the ground forces;
- (b) the air force; and
- (c) the riverine forces.

The active force shall be organized into divisions, brigades, battalions, companies, platoons and squads, organized into combat units, combat support and service support units and shall be under the direct command and control of such officers as may be assigned by the appropriate authority.

The command and control of the SPLA begins with the President who is also the Commander-in-Chief and who shall have the powers to commission, promote, retire or dismiss officers of the SPLA. Under the Act, the President has the following powers:

1. determine the political and military objectives of the SPLA;
2. issue political and executive directives to the Minister;
3. Appoint the Chief of General Staff in consultation with the Vice President of the Government of Southern Sudan, on the recommendation of the Minister;
4. issue military orders to the Chief of General Staff;
5. Appoint Deputies to the Chief of General Staff, directors of branches, armed service division commanders in consultation with the Minister and Chief of General Staff;
6. commission officers, and, grant promotion to general officers and delegate the promotion of other officers to the Chief of Staff;
7. convene a General Court Martial when appropriate;
8. commute sentences and pardon officers and other ranks sentenced by courts martial; and
9. declare a general mobilization and take appropriate measures in consultation with the Southern Sudan Legislative Assembly or request the declaration of the state of emergency in the whole or part of Southern Sudan in accordance with the provisions of Article 199 (2) of the ICSS.

The Command Council is a consultative body mandated by law to provide advice to the President. It consists of the Commander-in-Chief, the Minister of SPLA Affairs, the Deputy Commander in Chief, the Chief of General Staff, the Under Secretary of the Ministry of SPLA Affairs, Deputies of the Chief of General Staff, directors of branches, armed services and division commanders. The Council shall have a secretariat located at the SPLA Headquarters. The Command Council shall have a secretariat located in the SPLA.

The Chief of General Staff shall be responsible for the following:

1. the preparation of the SPLA military strategy and programs on the directives of the Command Council to organize and modernize the SPLA to ensure its ability to carry out its mission;

2. the organization of the SPLA forces into combat units, combat support and service support units and staff;
3. the determination of personnel, military equipment and material requirements; in consultation with his or her Staff Command.
4. the recruitment, training and education of military personnel and management of their assignments and careers;
5. the development of operational plans, deployment of forces and command of the SPLA on behalf of the Commander-in-Chief;
6. ensuring the sustenance of operational units through the distribution, management and maintenance of military equipment, hardware, material and facilities;
7. enhancing the morale and welfare of the SPLA personnel;
8. ensuring the combat readiness of the SPLA forces;
9. making recommendation to the Commander-in-Chief, of officers for commissioning and promotion in accordance with established regulations and procedures governing promotion;
10. convening a General Court Martial when appropriate;
11. the development of the necessary military rules, regulations and standing operating procedures for the purpose of effective and efficient management of the forces;
12. the recommendation for appointment of the staff branch Directors to the Commander -in-Chief, in consultation with the Minister;
13. the assignment of senior officers to various SPLA brigades, battalions and specialized units as shall be directed by the Commander-in-Chief;
14. the development and supervision of research and development capabilities;
15. determination of the number and the quality of civilian employees required to serve in the SPLA and submission of the same to the Minister for approval and appointment; and
16. any other function as shall be delegated to him or her by the President and Commander-in-Chief, the Minister, this Act and regulations.

The Deputies of the Chief of General Staff shall:

1. assist the Chief of General Staff in preparing and executing strategic plans, coordinating and supervising the activities in their respective areas of responsibilities; and
2. prepare briefings and submit regular reports on their activities to the Chief of General Staff.

As noted, the SPLA was renamed SSPDF for “South Sudan People’s Defence Forces” on 2 September 2018. The Chief of Staff of the SSPDF is **Lt Gen Gabriel Jok Riak**, who was appointed in May 2018. He directly commands and controls the ground forces through the Commander of the Ground Forces **LT Gen Santino Deng Wol**.

South Sudan is divided between three “Corps-level” commands called “Sectors,” each commanded by a Lieutenant General, answerable to the Commander-in-Chief via the Chief of the General Staff. Each Sector had several subordinate Divisions, Brigades and Battalions.

There are nine divisional light infantry formations of the ground forces deployed nationwide with specific areas of operation and established headquarters, as follows:

- Division 1 in Renk, Upper Nile commanded by Mgen James Wijong
- Division 2 in Owachi, Malakal in Eastern Nile State commanded by MGen Akol Majok

- Division 3 in Wunyik, Northern Barh El Ghazal commanded by MGen Butros Bol Bol (MGen Dau Aturyong, earlier)
- Division 4 in Rubkona, Unity State commanded by MGen Samson Lual
- Division 5 in Wau, in Wau State commanded by MGen Keir Kiir Keir (MGen William Gum later part of 2019)
- Division 6 in Maridi, Western Equatoria commanded by MGen Johnson Juma Okot
- Division 7 in Torit commanded by MGen Victor Odong
- Division 8 in Bor, Jonglei State MG Malual Majok
- Division 10 recently deployed in Panachier, Warrap State, commanded by MGen Garang Mading

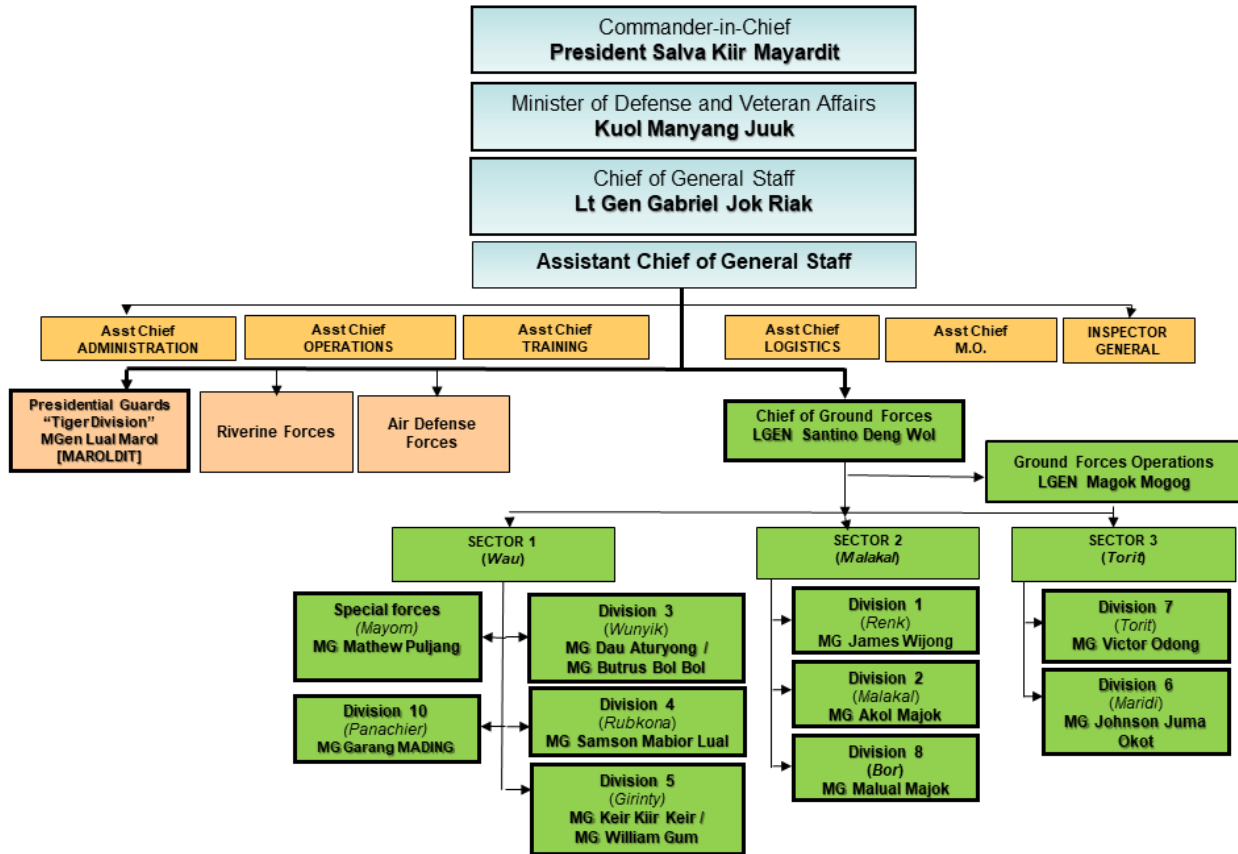
There is further a Special Forces unit with four brigades under MG Mathew Puljang based in Mayom, Unity State. The Presidential Guards, known as the “Tiger” Division and commanded by MGen Lual Marol [MAROLDIT] is headquartered in BILPAM in Juba (also known as the Jamus) with some of its forces believed to be deployed in strategic areas in the country.

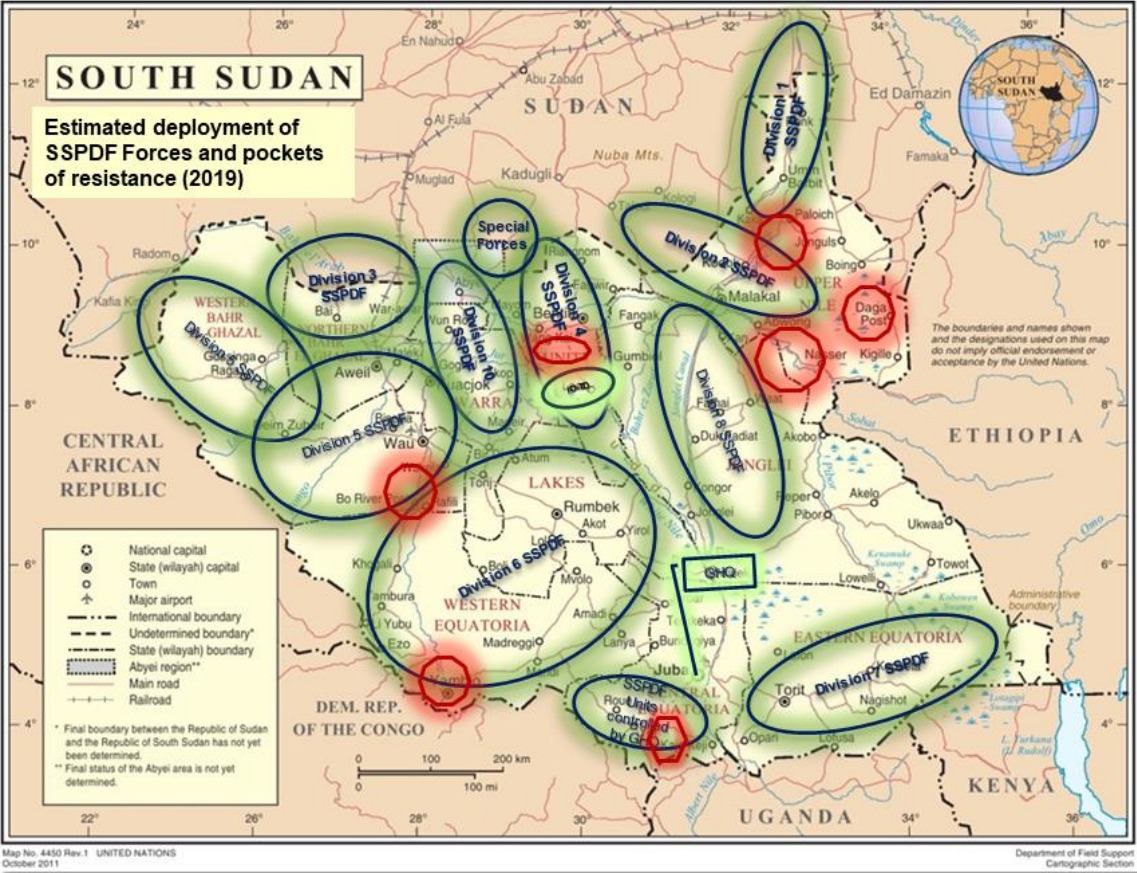
In May 2017, President Kiir issued Presidential Decrees restructuring the SPLA into three branches, namely: the ground force, air force and air defense Forces and Naval Forces. Each of the institutions was to be overseen by a commandenother Presidential Decree calls for the restructuring of the General Staff consisting of the following: The Commander in Chief, the Minister of Defense and Veteran Affairs, the Chief of Defense force, the Deputy Chief of Defense force and Inspector General. The same Decree abolished the previous structure, where deputy chief of general staff is now assistant chief of general staff and renaming the deputies to assistants.

Command and Control of SSPDF and Estimated Deployment in 2019 are as follows:

SSPDF General Staff and Defense Forces

December 2019





Annex V

Armed non-State actors (estimated deployment until 31 December 2019)

